



# Reforma del proceso en las causas matrimoniales

según la Carta Apostólica «Causas  
matrimoniales» de Pablo VI\*

**Marcelino Cabreros de Anta**

El objeto más frecuente del proceso judicial en los tribunales eclesiásticos es el matrimonio entre los cristianos. Función sagrada y a la vez social, de altísima trascendencia, que Cristo ha encomendado a su Iglesia y que hace sensible la presencia activa de ella en el mundo, al mismo tiempo que revela la estrecha unión que existe entre lo sagrado y lo profano, no obstante la autonomía de entrambos órdenes.

La Iglesia intenta ejercer con toda solicitud su oficio de ordenar según la ley divina las relaciones que promanan del sacramento del matrimonio y reclama su derecho inalienable en esta materia, deseosa de prestar su ministerio de justicia y de amor a cuantos legítimamente lo demanden. Pero, así como se alegra de que todos cuantos lo necesitan acudan a ella en busca de remedio o de so-

lución a los graves problemas que la vida matrimonial presenta sobre su legitimidad o sobre el cumplimiento de sus deberes, se lamenta no poco de que las situaciones conflictivas en torno al matrimonio se vayan multiplicando cada día más por falta de buena fe o de la debida madurez al contraer el matrimonio, y también por falta de fidelidad a los compromisos contraídos.

La presente reforma del proceso matrimonial, decretada por S. S. Pablo VI, con fecha 28 de marzo de 1971, no intenta facilitar la ruptura del vínculo matrimonial, establecido como indisoluble por la ley divina, sino resolver de modo más apto y más rápido las dificultades, dudas o controversias que en torno a la vida matrimonial puedan suscitarse y no hallen solución por la

\* AAS 63, 1971, pp. 441-446.

vía siempre preferible y aconsejable del amor, del sacrificio voluntario y del mutuo acuerdo, dentro de las exigencias ineludibles de la ordenación divina y de la legítima ordenación eclesiástica.

En el presente comentario a la Carta Apostólica «Causas matrimoniales» no intentamos dar una visión completa del proceso matrimonial tal como ahora queda configurado, con la integración de lo nuevo que se introduce en el núcleo todavía subsistente de la legislación anterior. Esto nos obligaría a reconstruir todas las piezas del proceso que en esta Carta Apostólica de Pablo VI se modifican de alguna manera, lo cual resulta innecesario y contraproducente; porque entonces la misma complejidad impediría ver el propio alcance y valor de la reforma. Dando por supuesto el conocimiento del proceso matrimonial anterior, ahora parcialmente derogado, sólo queremos destacar las modificaciones introducidas sobre la competencia de los tribunales y su constitución, sobre las apelaciones y las reglas que han de observarse en los casos que el documento pontificio llama especiales y que son parecidos a los que antes se llamaban exceptuados. Señalaremos la relación de las modificaciones con la legislación del Código y con la Instrucción «Provida Mater», juntamente con la exposición de motivos y valoración de las nuevas normas. La doctrina general sobre la materia y aún casi toda la legislación anterior continúan siendo válidas, y pueden verse en los modernos tratados de derecho procesal canónico. Nosotros hemos expuesto la materia en los dos primeros volúmenes de «Estudios Canónicos» y en el volumen tercero de «Comentarios al Código de Derecho Canónico», editados por la BAC, donde especialmente se estudia el proceso

matrimonial. Sobre la presente Carta Apostólica pueden verse los trabajos de J. A. Souto y C. de Diego-Lora publicados en esta misma revista IUS CANONICUM, n. 23, año 1972, pp. 87-188. Y también el estudio de Mons. León del Amo, en «Revista Española de Derecho Canónico», vol. 27, año 1971, pp. 427-483.

#### TITULO DE LA CARTA APOSTOLICA «CAUSAS MATRIMONIALES»

He aquí la inscripción del *Título*: «Carta Apostólica de Su Santidad Pablo VI, en forma de Motu proprio, con la que se establecen algunas normas para la más pronta resolución de los procesos matrimoniales».

El título tiene valor de norma interpretativa según el adagio: *de rubro ad nigrum valet illatio*. Y en este título debemos notar primeramente que, en vez de especificar el objeto del documento, lo que se hace más directamente es señalar el *fin que se pretende*, a saber, la más pronta resolución de los pleitos matrimoniales. No se pretende, pues, cambiar el derecho sustantivo sobre la indisolubilidad, obligaciones, impedimentos, consentimiento o forma canónica del matrimonio, ni siquiera modificar sustancialmente la mecánica procesal. Solamente se cambian *algunas normas procesales*, y esto con el solo fin de abreviar el proceso, sin el menor perjuicio para la administración de la justicia en conformidad con las leyes que tutelan el bien común y el bien particular. La cláusula «motu proprio», incluida en el mismo título, es otra norma interpretativa que indica la especial liberalidad con que procede el Sumo Pontífice en este caso, aunque de aquí no se sigue que el documento



haya de interpretarse siempre en sentido amplio. El presente *Motu proprio* debe interpretarse según el sentido propio de las palabras y el uso común (canon 49), y, cuando haya duda, más bien en sentido estricto (canon 50), teniendo presente su materia y la finalidad propia del actual documento, que es la más ágil y expedita resolución de los procesos matrimoniales. Véase también el canon 23 sobre la revocación de la ley precedente. La finalidad próxima o inmediata va ordenada a otra más alta y propia de todos los procesos matrimoniales, que es, conforme se dice luego en el Preámbulo, «la caridad pastoral de la Iglesia, la cual sabe muy bien cuánto se debe tener en cuenta la salvación de las almas en los procesos matrimoniales».

#### PREAMBULO DE LA CARTA APOSTOLICA

Con el fin de dar el texto íntegro del documento pontificio, empezamos por copiar el *Preámbulo*, de gran valor para la interpretación de las siguientes normas que luego comentaremos más ampliamente.

«Las causas matrimoniales han merecido siempre especial atención por parte de la Santa Madre Iglesia, la cual trata de defender por medio de ellas la santidad y la genuina naturaleza del sagrado vínculo del matrimonio. El ministerio de los jueces eclesiásticos manifiesta claramente —aunque de un modo peculiar— la caridad pastoral de la Iglesia, la cual sabe muy bien cuánto se deba tener en cuenta la salvación de las almas en los juicios matrimoniales. Dado que en nuestros días ha aumentado notablemente el número de estas causas, la Iglesia no puede menos de ocuparse solíci-

tamente de esta materia. El aumento de las causas, según ya dijimos a los Prelados Auditores de la Rota Romana, «es un signo característico de la disminución del sentido del carácter sagrado de la ley, sobre la cual se asienta como en fundamento la familia cristiana; un signo de la inquietud y de la perturbación de la vida actual; un signo de las inciertas condiciones sociales y económicas en las que ella se desenvuelve, y por lo tanto del peligro que puede amenazar a la vitalidad y felicidad de la institución familiar» (cf. AAS 58, a. 1966, p. 154).

Continúa diciendo el Preámbulo: «La Iglesia confía, pues, que el interés concedido por el reciente Concilio Ecuménico a la ilustración y promoción del bien espiritual y del cuidado pastoral del matrimonio, produzca sus frutos también en lo que se refiere a la solidez del vínculo matrimonial; pero al mismo tiempo ella desea evitar, con el establecimiento de normas oportunas, que la demasiada duración de los juicios matrimoniales haga más grave aún la situación espiritual de muchos de sus hijos.

Por lo tanto, mientras se espera una más completa reforma del proceso matrimonial, que está preparando nuestra Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico, nos ha parecido oportuno dar algunas normas sobre la constitución de los Tribunales eclesiásticos y sobre el proceso judicial, mediante las cuales el mismo proceso matrimonial resulte más rápido.

Quedando, pues, inmutadas las demás normas canónicas sobre los procesos, «*Motu proprio*» y con nuestra Autoridad apostólica, decretamos y establecemos las siguientes normas que han de ser observadas en todos los Tribunales, aun Apostólicos, desde el 1 de octubre de 1971, hasta que se

promulgue el nuevo Código de Derecho Canónico».

Bien claras están en este Preámbulo la solicitud especial de la Iglesia en las causas matrimoniales; la caridad pastoral que se ejerce por el ministerio de los jueces; el creciente y lamentable aumento de los pleitos matrimoniales en los últimos tiempos, con grave perjuicio para el bienestar familiar así como para el orden moral y social; el gran interés por acelerar estos procesos y consiguientemente la necesidad de la presente reforma procesal, que ahora se realiza con carácter interino y tiene vigencia desde el 1 de octubre de 1971 hasta que se promulgue la revisión del Código que se está preparando.

Importa aclarar el *alcance u objeto* de la actual reforma. *¿Se refiere tan sólo a las causas en que se trata de la nulidad o de la validez del matrimonio?*

En el *título* de la Carta Apostólica nada expresamente se dice, ya que se habla sin distinción de los procesos matrimoniales, y éstos pueden ser de nulidad, de separación y de otras clases. En el *preámbulo*, que es donde se determina el objeto del presente documento, se hace referencia únicamente a las causas matrimoniales de nulidad, mencionando «la santidad y la genuina naturaleza del sagrado vínculo del matrimonio» y la «solidez del vínculo matrimonial». El *texto del articulado*, visto en conjunto, se dirige todo él a las causas matrimoniales de nulidad. Por eso se presupone, como norma general, que el tribunal es colegiado, aunque se admite también, en casos particulares, que el juez sea un solo clérigo (norma V, §§ 1 y 2). Al hablar de las *apelaciones* (normas VIII y IX) se hace referencia cons-

tantemente al *colegio* como tribunal y al *defensor del vínculo*.

De lo dicho se concluye con toda certeza que el documento pontificio «Causas matrimoniales» trata propia y directamente tan sólo de las causas matrimoniales en cuanto a la nulidad o validez del vínculo del matrimonio. Pero todavía cabe preguntar si las normas del documento o algunas de ellas son aplicables a las demás causas matrimoniales.

La conveniencia de acelerar todo lo posible cualquier proceso matrimonial es evidente. Pero lo que ahora precisa dilucidar es si para la aceleración de cualquier proceso matrimonial se pueden y aun se deben observar las normas establecidas en la presente Carta Apostólica de Pablo VI. Debemos descartar primeramente las causas sobre el matrimonio rato y no consumado, ya que este proceso no es propiamente judicial sino más bien de carácter administrativo y la decisión está reservada al Sumo Pontífice. Lo mismo debe decirse de la disolución del vínculo matrimonial por causa del privilegio paulino o del privilegio de la fe. Las causas acerca de los efectos meramente civiles del matrimonio competen de ordinario al tribunal civil. Quedan las causas de separación conyugal y las causas sobre los efectos espirituales del matrimonio o los efectos temporales inseparables de los espirituales. ¿Pueden aplicarse las normas del *Motu proprio* de Pablo VI a estos procesos, con el fin de obtener la deseada aceleración?

La aplicación más correcta de las normas de interpretación nos lleva a dar una respuesta más bien negativa; porque el texto de la Carta Apostólica habla solamente, en todas y cada una de sus partes, del proceso de nulidad matrimonial, sin que ni una so-



la vez haga mención de las otras causas matrimoniales. Por otra parte, excluidas las tres primeras normas que son del todo generales, solamente lo que se contiene en la norma IV sobre los criterios de competencia relativa del tribunal y sobre la transferencia de la causa, más algunas prescripciones sobre la constitución de los tribunales, pueden aplicarse a otros procesos matrimoniales.

Creemos por consiguiente que, si bien es cierto que todas las causas y sobre todo las matrimoniales deben resolverse con la rapidez posible, lo cual en las causas de separación urge algunas veces tanto como en las de nulidad, aunque por razones distintas; en fuerza solamente del presente texto no se puede aplicar la actual reforma a otras causas matrimoniales distintas de las de nulidad. Ni siquiera por razón de analogía; ya que no existe laguna jurídica o falta de legislación sobre los demás procesos matrimoniales y por lo tanto no hay lugar a la integración o suplencia del derecho (canon 20), ni la derogación se hace por analogía (cánones 22 y 23).

Es necesaria una intervención de la autoridad competente para extender parcialmente el documento pontificio que comentamos a otros procesos matrimoniales, concretamente a las causas de separación conyugal y en su caso a las de los efectos del matrimonio. Seguramente que la intervención oficial no se hará esperar aun en forma más general que la respuesta ya dada en sentido afirmativo por el Excmo. Sr. Secretario del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica con fecha 26 de agosto de 1971 (Protocolo 1987/71), según referencia del Auditor de la Rota Española, Mons. León del Amo, en Revista Española de Derecho Canónico, vol. 27, a.

1971, p. 433. Interesa grandemente que la norma IV así como las prescripciones de las normas V-VII sobre la participación de los clérigos no sacerdotes, laicos y mujeres en la constitución del tribunal se apliquen cuanto antes de modo general a las causas de separación conyugal y a las de los efectos del matrimonio. El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica puede prorrogar del modo que juzgue oportuno la competencia de los tribunales (Constitución Apostólica «Regimini Ecclesiae Universae», 15 de agosto de 1967, n. 105).

#### FUERO COMPETENTE (normas I-IV)

##### A) JURISDICCION ECLESIASTICA Y JURISDICCION CIVIL EN LAS CAUSAS MATRIMONIALES (normas I-II).

I. «Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant».

II. «Causae de effectibus matrimonii mere civilibus pertinent ad civilem magistratum, nini ius particulare statuatur easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri».

I. «Las causas matrimoniales de los bautizados corresponden, por derecho propio, al juez eclesiástico».

II. «Las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio competen al magisterio civil, a no ser que el derecho particular establezca que esas mismas causas, si son incidentales y accesorias, puedan ser tratadas y definidas por el juez eclesiástico».

En la norma I se trata de las causas estrictamente matrimoniales, y en la norma II de las causas matrimoniales en sentido amplio. Son *causas estrictamente matrimoniales* las que tienen por objeto: a) el valor o nulidad del matrimonio; b) la declaración de consumación o inconsumación; c) la separación de los cónyuges, sea perpetua, sea

temporal; d) la disolución del matrimonio meramente rato y no consumado; e) la disolución del matrimonio en virtud del privilegio paulino o del privilegio de la fe.

Son *causas en sentido amplio* las que versan sobre los llamados *efectos meramente civiles*, es decir, efectos *temporales separables* del matrimonio. Tales son las causas que tienen por objeto: a) la reparación de daños por disolución o incumplimiento de los esposables; b) la cuantía de la dote, el derecho a los alimentos, la administración de bienes, sucesión hereditaria, etc.

En las dos primeras normas que ahora comentamos se fijan los límites externos de la jurisdicción eclesiástica en las causas matrimoniales, es decir, la línea divisoria entre la jurisdicción eclesiástica y la civil. Estas dos normas son paralelas a las que se establecen en el canon 1553, y más concretamente en los cánones 1016, 1960, 1961, y también en la Instrucción «Provida Mater» de la S. Congregación de Sacramentos, 15 de agosto de 1936 (AAS 26, a. 1936, pp. 313 ss.). Pero se observan todavía algunas diferencias entre la Carta Apostólica de Pablo VI y la legislación anterior.

Tanto en el canon 1553 de modo general como en el canon 1960, con referencia a las causas matrimoniales, y en el artículo 1, § 1 de la Instrucción «Provida», se dice que «las causas matrimoniales entre bautizados (aunque solamente una de las partes esté bautizada, conforme se dice en la Instrucción) pertenecen por derecho propio y exclusivo al juez eclesiástico». Ahora, en el Motu propio de Pablo VI, se dice que tales causas, que son las matrimoniales en sentido estricto (norma I), pertenecen, por derecho propio, al juez eclesiástico; pero no se añade que tal derecho sea *exclusivo*. Con ello se

intenta manifestar que la *Iglesia puede encomendar al tribunal civil* el ejercicio del derecho que es *propio* del tribunal eclesiástico, si bien la autoridad civil no lo puede usurpar. Ahora cabe preguntar: ¿es conveniente que la Iglesia encomiende al tribunal civil las causas matrimoniales en sentido estricto? En cuanto a las causas de nulidad matrimonial la doctrina y la práctica están de acuerdo en la respuesta negativa. Respecto de las causas de *separación conyugal* la Iglesia ha hecho ya algunas concesiones a favor del tribunal civil. En España creemos que tal concesión sería del todo imprecendente e injustificada. Así lo defendimos en la XIII Semana de Derecho Canónico de Zaragoza, año 1970 (Cf. Actas de la Semana, «La institución concordataria en la actualidad», Salamanca, 1971, p. 559). El Auditor de la Rota Española, L. del Amo, sostiene decididamente la misma posición (l. c., p. 412).

También en lo que respecta a los *efectos meramente civiles*, que son las causas matrimoniales en sentido amplio (norma II) hallamos alguna diferencia entre el último documento pontificio y la legislación anterior. Según el canon 1961, reproducido en el artículo 1, § 2, de la Instrucción «Provida», «las causas acerca de los efectos meramente civiles del matrimonio, si se tratan como causa principal, pertenecen al magistrado civil, en conformidad con el canon 1016; pero si como causa incidental y accesoria, puede también el juez eclesiástico conocer en ellas y sentenciarlas en virtud de su potestad propia». Tenemos en este segundo supuesto una causa de *fuero mixto* en el que se da lugar a la prevención de los tribunales eclesiástico y civil (canon 1553, § 2).

Según el derecho particular de España, con-



tenido en el Concordato del año 1953, artículo 24, 2, aun cuando la causa sobre los efectos meramente civiles surja incidental y accesoriamente, una vez incoada y admitida la causa principal ante el tribunal eclesiástico, corresponde al tribunal civil juzgar dicha causa. Esto implica, por parte de la Iglesia, la *renuncia* al conocimiento de los efectos meramente civiles del matrimonio cuando la causa sobre alguno de esos efectos se suscita incidentalmente, atendida la legislación del Código y de la «Provida Mater».

Pero ahora la nueva y provisional disposición contenida en la norma II del presente documento da un paso más e invierte lo establecido en el canon 1961. La norma de la Carta Apostólica ya no es que las causas incidentales y accesorias sobre los efectos meramente civiles del matrimonio *puedan también ser conocidas por el juez eclesiástico*, a menos que otra cosa se establezca en el derecho particular —como sucede en España— sino que la norma es la contraria: dichas causas *no pueden ser conocidas en el tribunal eclesiástico*, a no ser que el derecho particular establezca legítimamente otra cosa. Ahora ya no sería necesaria la concesión hecha en nuestro Concordato.

La norma del Motu proprio de Pablo VI es acertada. Por una parte, apenas se puede decir que las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio tengan interés pastoral; y por otra parte, ni le conviene al tribunal eclesiástico inmiscuirse en tales asuntos de orden temporal ni generalmente dispone de medios adecuados para conocer la causa y sobre todo dar eficacia a la resolución tomada en esa materia.

De las causas matrimoniales *dobles o mixtas*, que directa y totalmente interesan, por

diversas razones, al orden eclesiástico y al civil, como son el adulterio, bigamia y otros delitos relacionados con el matrimonio, nada se dice en las presentes normas. Debe entenderse que estas causas, debidamente desdobladas, pertenecen, cada una en relación con la respectiva ley, al propio tribunal eclesiástico o civil, con entera independencia el uno del otro.

#### B) COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ECLESIASTICOS (normas III, IV).

III. «Omnes causas matrimoniales, ad eos spectantes, de quibus in C.I.C., can. 1557, § 1, n. 1.º, illa congregatio vel Tribunal aut specialis Commissio exclusive cognoscit, cui eas Summus Pontifex in singulis casibus commiserit.

IV. § 1. In ceteris casibus nullitatis matrimonii competens est:

a) Tribunal loci in quo matrimonium celebrantum est, vel

b) Tribunal loci in quo pars conventa commorationem non precariam habeat, quae ex aliquo ecclesiastico documento vel alio legitimo modo probari possit, vel

c) Tribunal loci in quo de facto colligendae sint pleraeque depositiones seu probationes, dummodo accedat consensus tum Ordinarii loci commorationis habitualis partis conventae, tum Ordinarii loci et praesidis Tribunalis aditi.

§ 2. Si casus accadat de quo in praecedenti § 1, c), Tribunal, antequam causam admittat, exquirat a parte conventa, num quid excipiendum habeat contra forum aditum a parte actrice.

§ 3. Mutatis substantialiter circumstantiis aut locorum aut personarum de quibus in § 1, instantia ante conclusionem in causa potest transferri in casibus particularibus de uno ad aliud Tribunal aequae competens, si accedat consensus partium et utriusque Tribunalis».

III. «Todas las causas matrimoniales que se refieren a las personas indicadas en el canon 1557, § 1, n. 1.º del C.D.C., son tratadas exclusivamente por aquella Congregación o Tribunal o Comisión especial a la que el Sumo Pontífice las encomiende en cada caso.

IV. § 1. En todas las demás causas de matrimonio es competente:

a) el Tribunal del lugar en que ha sido celebrado el matrimonio; o

b) el Tribunal del lugar en que la parte demandada tenga residencia no precaria, que pueda ser aprobada con documento eclesiástico o de otro modo legítimo; o

c) el Tribunal del lugar en que de hecho se deban recoger la mayor parte de las declaraciones o pruebas, con tal que se obtenga el consentimiento tanto del Ordinario de lugar de la residencia habitual de la parte demandada, como del Ordinario y del presidente del Tribunal ante el que se ha presentado la demanda.

§ 2. Si se presenta el caso señalado en el § 1, c), el Tribunal, antes de aceptar la causa, pregunta a la parte demandada si tiene algo que objetar contra el fuero al que se ha dirigido la parte demandante.

§ 3. Cuando han cambiado sustancialmente las circunstancias de lugar o de personas a las que refiere el § 1, la instancia, antes de la conclusión en la causa, puede ser transferida en casos particulares de uno a otro Tribunal igualmente competente, con tal que se dé el consentimiento de las partes y de ambos Tribunales».

### 1) Competencia absoluta o genérica (norma III).

La Carta Apostólica, aunque solamente toca algunos puntos del derecho procesal matrimonial —aquellos que intenta reformar o que contienen un elemento integrante necesario— sigue en lo posible un orden lógico y similar al del Código. Por eso, después de referirse a la delimitación jurisdiccional de la esfera eclesiástica y de la civil en las normas I y II, pasa a tratar en las normas III y IV de la *distribución de la jurisdicción eclesiástica* entre los varios tribunales eclesiásticos, es decir, de la *competencia de los tribunales* o de la parte de la jurisdicción eclesiástica que compete a cada tribunal.

Respecto de la *competencia absoluta*, que se determina según los criterios de la materia, dignidad de las personas y grado del tribunal, la norma III se limita a transcribir lo que el canon 1557, § 1 establece sobre el

derecho exclusivo del Sumo Pontífice a juzgar las causas de los que ejercen la suprema autoridad de las naciones, de sus hijos e hijas y de los que tienen el inmediato derecho de sucesión; añadiendo también lo que determina el canon 1962, en relación con las causas matrimoniales, acerca de la Congregación, Tribunal o Comisión que ha de tratar dichas causas por delegación del Papa en cada caso. La violación, por cualquier concepto, de la competencia absoluta implica la nulidad total del proceso.

### 2) Competencia relativa o territorial (norma IV).

Cuando una causa puede ser juzgada, atendida la competencia absoluta o genérica, por varios tribunales subalternos, entonces la asignación de la causa a un tribunal determinado se hace siguiendo el criterio de la demarcación y distribución territorial, con lo que se facilita la tramitación de la causa. Esta es la competencia que se llama *relativa* —competencia de un determinado juez con relación a una determinada causa—, y también *territorial*, porque la determinación de la competencia —presupuesta ya la competencia absoluta— se hace según diversas formas del criterio territorial o de la especial vinculación de la causa a un lugar. Si son varios los jueces competentes para una causa en concreto, sabido es que se da entre ellos lugar a la *prevención* o prioridad en la asunción de esa causa. La sola falta de competencia relativa hace ilícita e impugnabile la actuación judicial pero no lo hace de por sí inválida.

Las *formas o modalidades de la competencia territorial* son las que enumera el Código en los cánones 1560-1567; pero no todas



estas formas son igualmente aplicables a las causas matrimoniales. Según la legislación anterior a esta última reforma, únicamente *dos formas originarias* podían aplicarse a las causas matrimoniales: el lugar donde se celebró el matrimonio y el lugar donde tiene el domicilio o cuasidomicilio la parte demandada (canon 1964; Provida, arts. 6 y 7). La *prórroga voluntaria* de la competencia hecha en el acto de la celebración de un contrato (canon 1565, § 2) no puede extenderse al acto de contraer matrimonio (canon 1964). Pero creemos que la *prórroga legal*, fundada en la *conexión de las causas* (canon 1567), tiene también aplicación a las causas matrimoniales (cf. nuestros «Comentarios al Código de Derecho Canónico», vol. III, BAC, a. 1964, p. 240). Esto, aparte de la facultad ya mencionada de la Signatura Apostólica para prorrogar la competencia de los tribunales (Const. «Regimini Ecclesiae Universae», n. 105).

Las *modificaciones* que ahora introduce S. S. Pablo VI en relación con la competencia relativa o territorial en las causas matrimoniales son muy considerables y muy oportunas para la más rápida tramitación del proceso matrimonial.

- a) *Fuero competente por razón del lugar donde se celebró el matrimonio* (norma IV, § 1, a).

La primera forma originaria de la competencia territorial que el Código señala para las causas se conserva en la Carta Apostólica de Pablo VI. La competencia del tribunal *por razón del lugar donde se celebró el matrimonio* (norma IV, § 1, a) reproduce lo que se dice en el canon 1964. Cf. también canon 1565, § 1 y el artículo 3 de la «Provida Mater». Pero, no obstante la interpretación

general dada por la Comisión Intérprete, el 14 de julio de 1922, al canon 1565, § 1, se admite que el tribunal competente por razón del lugar donde se celebró el matrimonio pueda invocarse también contra el *ausente* al incoarse la causa.

- b) *Fuero competente por razón de la residencia no precaria* (norma IV, § 1, b).

Se acepta también la segunda forma canónica del fuero competente en las causas matrimoniales es decir, la competencia *del lugar donde reside el demandado*, más exactamente, la del tribunal *del lugar en que la parte demandada tenga su residencia no precaria* al intimarse la citación, con tal que dicha forma de residencia se pueda probar con documento eclesiástico o de otro modo legítimo.

La frase del Motu proprio «residencia no precaria» sustituye a las palabras «domicilio o cuasidomicilio» del canon 1964. El término «residencia» es más usual pero, canónicamente, menos técnico y también menos claro que los términos «domicilio y cuasidomicilio», aunque se añada el calificativo de «no precaria». ¿Qué significa la expresión un tanto nueva en la materia que nos ocupa: *residencia no precaria*? *Residencia no precaria* es la residencia no transitoria sino duradera o *habitual*, como se dice en la norma IV, § 1, c). Pero todavía esto resulta muy impreciso y en la práctica insuficiente como criterio determinante de la competencia judicial. El nuevo Código fijará algún plazo o añadirá algún elemento, sea real o intencional, por el que podamos discernir cuándo la residencia del demandado no es precaria. Hasta tanto que se dé alguna norma sobre el particular, creemos que lo único seguro es atenerse a lo

establecido en el Código vigente y ahora expresado con una fórmula *indeterminada*, que en cuanto tal no debe variar el derecho anterior (cf. canon 23). Consiguientemente diremos que la residencia *es precaria* mientras no haya domicilio o al menos cuasidomicilio en sentido canónico. Pero debe tenerse en cuenta que la residencia *no precaria* o *habitual* en el sentido dicho empieza a existir desde el primer momento en que, teniendo intención demostrable de residir en un lugar el tiempo requerido para la residencia no precaria, se establece allí de hecho la residencia física. La residencia necesaria o legal empieza a existir desde el momento en que se produce el hecho jurídico al que va vinculada la misma residencia.

Bien conocidos son los abusos a que ha dado lugar la determinación de la competencia judicial por razón del *cuasidomicilio*. Por eso dice la Instrucción «Provida Mater», artículo 5: «Cuando la causa haya de introducirse ante el Ordinario del cuasidomicilio, ha de observarse la Instrucción de esta S. Congregación del 23 de diciembre de 1929», en la que se precisan muy detalladamente las condiciones necesarias para poder seguir el fuero del cuasidomicilio. Siendo esto así, no debe presumirse que baste ahora una residencia que no alcanza ni siquiera la mínima estabilidad del cuasidomicilio, tan fácil de adquirirse y de multiplicarse. Bien está que se facilite la introducción y la pronta tramitación de las causas, especialmente de las matrimoniales, pero no abriendo la puerta a los abusos con normas dudosas o indeterminadas.

¿Qué debe decirse de los *vagos*? (canon 91). Según el canon 1563, el vago tiene su tribunal propio en el lugar donde actualmente se halla. Pero el canon 1964, al hablar de las

causas matrimoniales, no recoge este principio: por lo cual, según la legislación del Código, para los vagos, como no tienen en ninguna parte domicilio o cuasidomicilio, no hay otro fuero competente que el del lugar donde se celebró el matrimonio. ¿La Carta Apostólica de Pablo VI, exigiendo únicamente la residencia no precaria o habitual, ha ampliado esta disciplina? No admitimos como principio que sola la *residencia mensual*, materialmente considerada, sin ninguna otra condición, haya de tenerse como residencia no precaria. Pero respecto de los vagos —si ha de facilitarse también para ellos la tramitación del proceso matrimonial, a veces muy difícil en el lugar de la celebración del matrimonio— creemos que podría bastar la *menstrua commoratio*, así como es suficiente para que el párroco asista lícitamente a su matrimonio (canon 1097, § 1, 2.º).

El Auditor de la Rota Española, Del Amo, en su excelente estudio ya citado sobre la «Nueva tramitación de las causas matrimoniales» (REDC, año 1971, p. 437) escribe: «creemos que tienen residencia no precaria los habitantes que permanecen en un lugar sin tener en él domicilio o cuasidomicilio, aunque sí permanencia habitual o habitación permanente desempeñando un cargo, profesión o empleo, o simplemente habitando allí por motivo de salud, de trabajo, estudio, recreo, etc., con tal que no moren de paso como puro viajero, turista o visitante pasajero».

Fácilmente, añadimos nosotros, varios de estos casos, en determinadas situaciones, se reducen al *cuasidomicilio*, sea voluntario o legal y entonces no hay dificultad. ¿Pero, si no se da al menos la figura del cuasidomicilio, podrá hablarse en estos casos de resi-



dencia no precaria, sin que haya lugar a arbitrariedades, dudas e impugnaciones o excepciones de incompetencia? Y si esto casi necesariamente tiene que suceder, la residencia no precaria en tales casos, distinta del cuasidomicilio, más que facilitar la pronta sustanciación de la causa, lo que haría es entorpecerla con nuevos incidentes procesales.

Acerca de la *prueba de la residencia no precaria* de la parte demandada se dice que basta un *documento eclesiástico* o que puede hacerse *de otro modo legítimo*. Los documentos pueden ser públicos —eclesiásticos o civiles— y privados (cf. cc. 1812-1818). Además de la prueba documental, se admite la testifical y cualquiera otra admitida por la ley (cf. cc. 1750-1836). Lo que importa es que se llegue a una demostración cierta de la residencia no precaria de la parte demandada; porque de la certeza de la demostración, faltando otro título de competencia en el tribunal, depende la legitimidad del proceso.

¿Se requiere todavía para la prueba del cuasidomicilio o de la simple residencia no precaria cuanto se prescribe en la Instrucción de la S. Congregación de Sacramentos, 23 de diciembre de 1929? Cf. AAS 22, a. 1930, p. 490, y 28, a. 1936, p. 365). La respuesta creemos que ha de ser negativa; porque en el documento que ahora comentamos no se exige el procesillo preliminar, bastante detallado y riguroso, que prescribió la S. Congregación de Sacramentos, sino tan sólo cualquier prueba legítima, capaz de dar certeza acerca del hecho de la residencia habitual. Este simple procedimiento que ahora se autoriza permite la aceleración del proceso matrimonial, y esto es lo que se pretende.

Al decir la norma IV, § 1, b) que es competente el tribunal del lugar en que la parte demandada tenga su residencia no precaria, observamos que se han suprimido las siguientes palabras del canon 1964: «o, si una de ellas es acatólica, en donde lo tiene (domicilio o cuasidomicilio) la parte católica».

¿Debemos completar la norma IV con el inciso del canon 1964? Opinamos que no. La supresión del inciso se ha hecho intencionalmente, y no sin razón. Aparte de que, ateniéndonos al principio de: *actor sequitur forum rei*, se evitan retrasos en el procedimiento y se facilita la defensa, no creemos que haya razón para cambiar la competencia del tribunal sólo porque la parte demandada sea *acatólica*. Pensamos, con sentido ecuménico, que la condición de *parte acatólica* no debe influir en la capacidad procesal de la parte demandada en relación a la competencia del tribunal. Tanto más que lo que de esta manera se consigue es castigar al tribunal propio de la parte demandada acatólica, privándole de su normal competencia y presuponiendo, sin ninguna razón, que ese tribunal va a ser algún tanto parcial, quizá por presión de la parte acatólica, inclinándose a favor de la parte acatólica demandada más que el tribunal propio de la parte católica, y aun inclinándose más de lo justo. Hay que presuponer, por el contrario, que ninguno de los dos tribunales será parcial sino que ambos actuarán con igual libertad y justicia.

c) *Tribunal del lugar en que se hayan de recoger la mayor parte de las pruebas* (norma IV, § 1, c) y § 2).

Se trata de la especial conveniencia de un determinado tribunal en razón precisamente de la mayor facilidad para recoger las prue-

bas, sobre todo la prueba testifical y la del acceso del tribunal. Esta tercera forma de competencia relativa o territorial en las causas matrimoniales es una de las más importantes innovaciones introducidas en la Carta apostólica de Pablo VI. Esta forma de determinar la competencia es nueva no sólo respecto de las causas matrimoniales sino en todo el proceso canónico. Y es ciertamente muy apta no solamente para imprimir mayor rapidez al proceso sino también para darle mayor eficacia en orden a la averiguación de los hechos. Al mismo tiempo debemos reconocer que, si la competencia del tribunal por razón de la simple residencia no precaria ofrece peligro de error y de fraude, mayor peligro todavía puede ofrecer la competencia por razón del tribunal que al principio se cree más ventajoso para la instrucción de la causa o alegación de pruebas. Ni la parte actora ni el tribunal pueden conocer siempre con certeza, antes de practicar toda la prueba, dónde van a hallarse las pruebas más numerosas, más fuertes y más complicadas. Y esto aun suponiendo que se obre de buena fe, la cual en las partes litigantes fácilmente puede faltar; porque lo que cada una de ellas busca ante todo es asegurar —por cualquier medio— su propia defensa, y esta ventaja quizá se halle allí donde menos abunden las pruebas del contrario o en un lugar distinto para cada una de las partes contendientes. Al tribunal que ha sido invocado le toca decidir sobre su propia competencia (cc. 1609, § 1; 1610); pero ya hemos dicho que, antes de la práctica total de la prueba, le es difícil conocer dónde se hallan las pruebas y cómo pueden recogerse con verdad y facilidad.

En razón del peligro de este nuevo título de competencia relativa —el tribunal que sea

más ventajoso—, el Motu proprio de Pablo VI exige *tres condiciones* necesarias para entablar el proceso ante dicho tribunal, si su competencia no se apoya además en alguno de los dos títulos anteriores, coincidente con este tercero. Las tres condiciones son: consentimiento del Ordinario de lugar de la residencia habitual de la parte demandada; consentimiento del Ordinario y consentimiento del presidente del tribunal ante el que se ha presentado la demanda.

¿Por qué se exige únicamente el consentimiento del Ordinario de lugar de la residencia habitual de la parte demandada, y no se exige igualmente el consentimiento del Ordinario del lugar donde se celebró el matrimonio? Creemos que en la norma IV, § 1, c) debiera ponerse como primera condición el consentimiento del Ordinario del lugar donde se celebró el matrimonio y el de la residencia no precaria del demandado, si tal residencia existe, además del doble consentimiento del Ordinario y del presidente del tribunal más ventajoso al que el actor acude.

Finalmente la norma IV, § 2 impone al tribunal, en el supuesto de ser elegido como más ventajoso, la *obligación de preguntar* a la parte demandada si tiene algo que objetar contra el fuero que el actor ha elegido en orden a la mejor práctica de las pruebas. He aquí otra precaución contra el peligro de este nuevo título de fuero competente. Mas tampoco con ella se aleja todo peligro de error o de fraude; porque el interés de las partes litigantes suele ser opuesto y, sobre todo al comienzo del proceso, fácilmente pueden desfigurar la verdad de los hechos y las presuntas favorables circunstancias de su demostración judicial. Esto que decimos no significa que el tercero y nuevo tí-



tulo de competencia del tribunal sea superfluo o incongruente; sólo quiere decir que los jueces del tribunal necesitan mucha perspicacia y discreción para decidir si la causa debe admitirse o no, fundándose en este nuevo título de competencia. Mons. Del Amo (l. c., p. 441) opina que, para la prevalencia del fuero de la *mayor parte de la prueba*, sería preferible exigir el previo acuerdo de las partes. Es cierto, pero entonces hay que reconocer que este tercer fuero no tendría mucha aplicación, ya que el acuerdo entre los contendientes se obtiene con dificultad.

d) *Transferencia de la instancia de uno a otro tribunal* (norma IV, § 3).

*Perpetuación de la competencia y transferencia de la causa.* En la norma IV, § 3 se autoriza la transferencia de la causa ya incoada de un tribunal a otro. Este hecho, ya de por sí e independientemente de unas u otras condiciones, introduce una modificación radical en la mecánica del proceso matrimonial. Uno de los principios generales del proceso judicial es la *perpetuación de la jurisdicción* o de la competencia en el juez que legítimamente asumió la causa por medio de la citación del demandado. El canon 1725, 2.º formula así el principio: «Desde el momento en que la citación ha sido legítimamente hecha o las partes han comparecido en juicio espontáneamente, la causa se hace propia de aquel juez o tribunal ante el cual fue presentada la acción».

La *citación* causa efecto preventivo o de prioridad, por el que el juez que primeramente hace suya la causa excluye a los demás jueces que eran competentes; pero cuya jurisdicción queda en aquel caso derogada (canon 1568), porque dos jueces no pueden juzgar una misma causa en una misma

fase de litispendencia ni un juez puede privar a otro de la jurisdicción que empezó ya a ejercer. La incompetencia del juez, que, siendo anteriormente competente, ahora ya no lo es para esa causa, y que usurpa la jurisdicción perpetuada en otro, es *incompetencia absoluta*; puesto que quebranta el *criterio funcional* de la competencia, como cuando no se observa el grado o jerarquía de los tribunales (canon 1571). La perpetuación de la competencia en el juez que primeramente citó al demandado hace viable también el principio procesal de la inmediatez y el de la identidad (contacto directo del mismo tribunal o juez y, a ser posible, de la misma persona con los elementos de cada causa); al mismo tiempo que favorece la rapidez del proceso, porque evita no pocas repeticiones en la instrucción y en el estudio de la causa.

Pues bien: el principio procesal de la *perpetuación de la competencia* por medio de la citación queda ahora sustancialmente alterado para las causas matrimoniales. Hemos de confesar que no nos agrada la tendencia a cambiar, en las causas matrimoniales, no obstante su índole especial, normas procesales que se consideran en el ordenamiento canónico y en el civil como normas comúnmente recibidas y consagradas. Con esa tendencia a las excepciones o particularismos procedimentales, el proceso canónico y aun el proceso matrimonial —de por sí e inevitablemente muy difícil— se complica todavía más y no pocas veces apenas hay quien sepa a qué atenerse en algo tan sagrado como la administración de la justicia. Los principios y aun todas las normas principales, en cuanto la materia lo permita, deben observarse igualmente en toda clase de procesos. ¿Para qué sirven las

normas generales del proceso canónico si luego, en las causas matrimoniales de uso tan frecuente, no se cumplen y se sustituyen por otras? Si tan importantes y necesarias son esas normas de excepción, valdría la pena de elevarlas a principios comunes, salvo aquello que es peculiar de las causas matrimoniales y que es lo único que debe regularse de distinta manera.

No negamos que la *transferencia de la causa* pueda ser en algún caso excepcional más o menos ventajosa; lo discutible es que ello compense el perjuicio que causa la mutación de los principios procesales. Sin duda que los procesalistas que han preparado el documento pontificio «Causas matrimoniales» se han percatado de la grave anomalía procesal que supone la *transferencia de la causa* respecto del principio de la *perpetuación de la competencia* en el juez que citó legítimamente al demandado; y por eso se ponen en el documento condiciones muy estrictas y límites de tiempo. He aquí los *requisitos para la transferencia de la instancia*.

1. *Cambio sustancial de las circunstancias de lugar o de la personas*. El *facti species* de este doble cambio sustancial no es difícil construirlo y los casos pueden multiplicarse. Claro es que los cambios solamente pueden referirse a la residencia de las partes y al tribunal de mayor conveniencia para la instrucción de la causa. Por eso habla la norma IV, § 3, del cambio del lugar o de las personas, pero no de la *materia* u objeto del proceso, es decir, de la misma demanda o título de ella ni tampoco de los plazos ya concedidos.

Los cambios sustanciales, hechos durante la litispendencia, que se refieren al objeto del pleito o a los plazos constituyen de por sí *atentado* contra la causa, y todo atentado

es inválido en virtud del mismo derecho (cc. 1854, 1855). Aun cuando, por consentimiento de las partes litigantes, el cambio sustancial del *objeto* de la petición judicial o de los *plazos* se realizase válidamente, sin atentado contra la causa (canon 1854), aun entonces no podría haber transferencia de la causa desde un tribunal a otro competente, si no hay a la vez cambio sustancial de las circunstancias de lugar o de las personas.

2. *Antes de la «conclusión en la causa»*. La transferencia puede hacerse después de la citación y antes de la conclusión en la causa. Es natural y obligado que la transferencia de la instancia se haga antes de la *conclusión en la causa*, es decir, antes de la terminación del período probatorio. Cuanto más adelantada se halle la fase probatoria del proceso o la instrucción de la causa, más peligrosa y desaconsejable es la transferencia de un tribunal a otro, salvo el caso de estacionamiento total en el primero. Por lo tanto, si ya el período probatorio normal ha concluido, la transferencia de la causa es inadmisibile: ya no queda más solución que proseguir en el mismo tribunal la discusión y dictar sentencia, esperando que en el tribunal de apelación, si a él se acude, haya mejor conocimiento y solución más acertada.

3. *En casos particulares*. Esto significa que se mantiene como principio general el de la *perpetuación de la competencia* y que la transferencia de la causa pendiente desde un tribunal a otro tiene siempre carácter de excepción; de donde se sigue que la transferencia no debe hacerse sino con criterio restrictivo.

4. *De un tribunal a otro igualmente competente*. La competencia de aquellos tribunales que fue derogada por la *prevención*



de uno de ellos al citar al demandado, se restituye ahora con la facultad de transferir a ellos la causa pendiente. Respecto del matrimonio, según el Motu proprio de Pablo VI, los tribunales competentes, en las causas no reservadas al Sumo Pontífice, son los tres de que se trata en la norma IV, § 1, y solamente entre ellos puede darse la transferencia de la instancia; bien sea que desde el principio fueran competentes o se hayan hecho competentes en el decurso del proceso por mutación de la residencia no precaria del demandado o por haberse hecho un tribunal más ventajoso para la alegación de la mayor parte de las pruebas.

5. *Consentimiento de ambas partes y de ambos tribunales.* Para la transferencia de la instancia no basta, a diferencia del caso del *atentado* (canon 1854), el consentimiento de ambas partes, sino que se requiere además el consentimiento de ambos tribunales; y éstos no deben prestar su consentimiento sin causa grave, ya que la transferencia es en general poco conforme a la sistemática procesal.

No se prescribe el consentimiento del *defensor del vínculo* ni siquiera es preceptiva su audiencia. Pero, atendida la naturaleza de las causas de nulidad matrimonial, y la misión propia del defensor del vínculo, es indudable que debe tenerse muy en cuenta su opinión.

Todos estos requisitos legales son necesarios para la validez, porque la transferencia modifica un principio general del proceso; pero la determinación de los *casos particulares* en los que puede y ha de realizarse la transferencia de la instancia depende del consentimiento de ambos tribunales y de ambas partes. Esto no impide que, si después se averigua o se cree que falta alguno

de los otros requisitos legales, pueda impugnarse la transferencia de la causa y aun la misma sentencia. Pero, una vez practicada legítimamente la transferencia, la causa ya no puede retornar al tribunal que instauró el proceso sin que de nuevo se cumplan todos los requisitos de la transferencia.

*Petición y tramitación de la transferencia de la instancia.* En el documento pontificio nada se dice sobre quién ha de pedir el traslado de la causa, y es que puede hacerlo cualquier persona interesada. La transferencia a otro tribunal competente no es una nueva petición judicial o demanda en sentido propio; tampoco es una apelación. La instancia continúa siendo la misma y del mismo grado aunque trasladada; la demanda es idéntica en cuanto a sus tres elementos: el personal o partes litigantes, el objetivo o materia del proceso y el causal o título de la petición. El traslado de la causa no es más que una providencia *para mejor proceder* en algunos casos especiales. Consiguientemente la petición pueden hacerla el mismo actor, quien en el decurso del proceso puede ver que las circunstancias han cambiado sustancialmente; también el demandado, lo mismo que el juez de oficio, el defensor del vínculo y el promotor de justicia si interviene en la causa. Lo esencial es que se cumplan todos los requisitos que exige la norma IV, § 3 y que el traslado no se haga dolosamente, porque en el primer tribunal una u otra parte ve perdida su causa o porque quiere dar largas al proceso.

La *tramitación* del traslado de la causa a otro tribunal competente debe hacerse al modo como se tramitan las *causas incidentales*, resolviéndose primeramente por decreto razonado del tribunal *a quo*; y, si este decreto es favorable, prosiguiendo en el tri-

bunal *ad quod*, el cual decidirá colegialmente por lo que a él respecta, con otro decreto sobre la admisión o no del traslado, previas las necesarias informaciones. Decidida favorablemente la transferencia por los dos tribunales, se remite al tribunal *ad quod* copia de todas las actas para que el proceso continúe, partiendo del mismo estado en que se hallaba. Resuelto el *incidente* del traslado, la causa prosigue según las normas del proceso matrimonial.

Todo esto manifiesta lo que ya hemos dicho, a saber, que la trnsferencia de la instancia, más que a acelerar la tramitación de la causa, tiende de por sí a retrasarla. Pero, en algún caso excepcional, puede todavía ser un remedio útil y hasta necesario para la mejor solución del pleito.

## CONSTITUCION DE LOS TRIBUNALES (normas V-VII).

### 1) Tribunal colegiado y tribunal unipersonal (norma V).

V. «§ 1. Si nec in Tribunali dioecesano nec in Tribunali regionali, ubi erectum sit, collegium trium iudicum clericorum efformari possit, Conferentia Episcopalis facultate instruitur permitendi in primo et secundo gradu constitutionem collegii ex duobus clericis et uno viro laico.

§ 2. In primo gradu, cum nec per aggregationem viri laici collegium de quo in § 1 efformari possit, singulis in casibus causae nullitatis matrimonii clerico tamquam iudici unico per eandem Episcoporum Conferentiam demandari possunt. Qui iudex, ubi fieri possit, assessorem et auditorem in iudicio sibi asciscat.

§ 3. Conferentia Episcopalis facultates, de quibus supra, concedere valet iuxta proprio statuta, vel per membrorum coetum, vel saltem per membrum Conferentiae, quae ad id eligantur».

V. «§ 1. Si en Tribunal diocesano o en el regional, donde esté erigido, no se pudiera formar un colegio

de tres jueces clérigos, la Conferencia Episcopal goza de la facultad de permitir, en primero y en segundo grado, la constitución de un colegio compuesto por dos clérigos y un seglar varón.

§ 2. En primer grado, si tampoco pudiera formarse el colegio, del cual se habla en el § 1, con la inclusión de un seglar, se podrá solicitar a la misma Conferencia Episcopal, en cada caso de causa de nulidad de matrimonio, un clérigo como juez único. Este juez, donde sea posible, asumirá un asesor y un auditor para el juicio.

§ 3. La Conferencia Episcopal puede conceder las facultades más arriba indicadas según sus propios estatutos, o por medio de un grupo de miembros, o al menos de un miembro de la Conferencia, que hayan sido elegidos a tal fin».

a) *Tribunal de tres jueces clérigos* (norma V, § 1). Las causas sobre el vínculo del matrimonio están reservadas al tribunal colegiado de *tres jueces* (canon 1576, § 1, 1.º), aunque el juez instructor de la inquisición acerca del matrimonio rato y no consumado es uno solo (canon 1966).

La potestad judicial es una de las tres funciones de la potestad jurisdiccional eclesiástica, cuyo ejercicio está reservado normalmente a los clérigos (cc. 108, 118). Pero según el Código, los jueces han de ser no solamente clérigos sino *sacerdotes* (cc. 1573, § 4; 1574, § 1). Aquí hallamos ya una gran novedad que se admite como norma general en el Motu proprio de Pablo VI para los procesos matrimoniales de nulidad y que por analogía irá aplicándose a los demás. En adelante los jueces, al menos en las causas de nulidad matrimonial, bastará que sean clérigos, aunque no estén ordenados de sacerdotes; y esto independientemente de la escasez de sacerdotes y sin necesidad de que intervenga la Conferencia Episcopal. Es una facultad ya concedida por el Papa, aunque con carácter provisional, hasta que se lleve a efecto la revisión general del Código.

Ahora, más que en los últimos siglos, pue-



de darse con alguna frecuencia el caso de clérigos —sobre todo de diáconos— que permanecerán en ese estado sin pretender recibir el orden sacerdotal. Uno de los ministerios sagrados más importantes que pueden ejercer esos clérigos, debidamente preparados y aun especializados, es el ministerio judicial, bajo la dirección del Obispo, que es el juez nato en su propia diócesis. Así los clérigos, no sacerdotes, podrían llegar a constituir, en mayor o menor proporción, el cuerpo judicial eclesiástico; a la manera como también esos mismos clérigos podrían ejercer no pocas funciones de la potestad administrativa eclesiástica, siempre por mandato y bajo la dirección del Ordinario local. Esto sería más factible si se admitiesen *clérigos menores permanentes y casados*.

Participando más ampliamente los clérigos no sacerdotes en la función judicial y en otras funciones administrativas, el ministerio propiamente sacerdotal, a pesar de la disminución del número de sacerdotes, podría dedicarse más de lleno a los actos propios de la potestad sacramental o de orden cuyo centro es la eucaristía, al gobierno pastoral, al anuncio del mensaje divino y a la evangelización de los pueblos. Este largo camino queda abierto y el primer paso está ya dado con la admisión en el tribunal eclesiástico de clérigos no sacerdotes y aun de laicos, según luego veremos.

b) *Tribunal de dos clérigos y de un seglar varón* (norma V, § 1). La constitución del tribunal por tres clérigos, aunque no sean sacerdotes, para las causas matrimoniales de nulidad ya hemos dicho que no requiere ninguna condición especial; basta cualquier razón de orden técnico o pastoral. Mas para que un *laico o seglar varón* entre a formar

parte del tribunal eclesiástico se requieren varias condiciones según la norma V, § 1. La primera es que no se pueda formar el tribunal colegiado con tres jueces clérigos. Basta que la imposibilidad sea moral, por falta de clérigos idóneos o porque los clérigos aptos son más necesarios para otros ministerios de gran importancia. La segunda condición es la petición hecha por el Ordinario del tribunal competente y falto de clérigos disponibles a la Conferencia Episcopal para que ésta use de la facultad de permitir la entrada de un laico a formar parte del tribunal eclesiástico en unión de otros dos clérigos; sin el permiso de la Conferencia Episcopal, la actuación de un laico como juez en el tribunal eclesiástico sería completamente inválida, por falta de jurisdicción. La autorización de la Conferencia para este caso puede ser actual o habitual y vale tanto para el tribunal de primer grado como para el de segundo. El *modo* como la Conferencia Episcopal puede conceder la licencia queda expresado en el § 3 de la misma norma V, según luego veremos.

El primer presupuesto para que un laico pueda entrar a formar parte del tribunal eclesiástico es que se trate de un tribunal diocesano o de un tribunal regional, en conformidad con las Normas del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para los Tribunales interdiocesanos, regionales o interregionales (AAS 63, a. 1971, pp. 486-492). El segundo supuesto es que se trate de un tribunal de primero o de segundo grado. No se comprenden, pues, en este supuesto los Tribunales de la Santa Sede ni el Tribunal de la Nunciatura Apostólica en España, los cuales se rigen por sus propias leyes.

Aun con estas limitaciones la admisión de los laicos varones en los tribunales eclesiás-

ticos para el ejercicio de la potestad jurisdiccional es una forma nueva de participación activa y responsable en el apostolado de la Jerarquía (cf. *Lumen gentium*, n. 33). Esta nueva participación que ahora se concede viene a esclarecer y a ensanchar algunos conceptos sobre el sujeto y ejercicio de la jurisdicción eclesiástica, hasta el presente tan limitada a la condición del estado clerical. La influencia sobre este punto de la profundización eclesial del Vaticano II es a todas luces manifiesta.

c) *Tribunal unipersonal de un juez clérigo* (norma V, § 2). En los dos casos anteriores se ha mantenido la necesidad del *tribunal colegiado de tres jueces* para las causas matrimoniales sobre la validez o nulidad del vínculo matrimonial, de acuerdo con lo que prescribe el canon 1576, § 1, 1.º, sobre el número de jueces, aunque permitiendo cierto cambio en lo relativo a su condición personal. Ahora, en el § 2 de la misma norma V, se va más allá, si bien en otro sentido tiene menor importancia: se permite la constitución del tribunal por un *juez único*, salvando varias condiciones.

Sabido es que tanto el tribunal colegiado como el unipersonal tienen sus ventajas e inconvenientes. Mas no cabe duda que para las causas graves o muy difíciles es preferible el tribunal colegiado. Por esta causa es preceptivo, según el Código, el tribunal de tres jueces para las causas sobre el vínculo matrimonial. Sin embargo, la norma V, § 2 del presente Motu proprio de Pablo VI autoriza excepcionalmente para tales causas el *tribunal unipersonal*. La razón es obvia: más vale que estas causas, no obstante su gran importancia y muchas veces su dificultad, sean vistas por un juez único a su debido tiempo, que no que dejen de resolverse

o se resuelvan después de largo tiempo, con grave daño para la vida familiar y para la salvación de las almas.

Las *condiciones* que se ponen en la norma V, § 2, indican que la solución de un *juez único* en las causas de nulidad matrimonial tiene carácter de excepción y de necesidad. Basta enumerarlas. La primera condición es nada menos que la *imposibilidad* de formar tribunal colegiado, ni siquiera con la inclusión de un seglar o laico varón. Aquí, como en otros casos parecidos, la imposibilidad es moral, pero debe entenderse en sentido estricto y riguroso. Además el juez único en las causas sobre el vínculo matrimonial ha de ser un *clérigo*, y esto creemos que se mantendrá siempre. Puede suceder que, corriendo el tiempo, se autorice, en algunos lugares y para algunas causas, que el tribunal, siendo verdaderamente eclesiástico y debiendo seguir el procedimiento eclesiástico, esté constituido por un solo juez laico. Pero esto creemos que no se autorizará para las causas matrimoniales, sobre todo las de nulidad. La autorización para constituir con un solo juez clérigo el tribunal la concede la Conferencia Episcopal, no habitualmente sino para cada caso, y sólo para el tribunal de primer grado, previa solicitud del Ordinario o Superior del tribunal que ha de juzgar la causa.

Muy oportunamente se añade que el *juez único* en estas causas matrimoniales asumirá, si es posible, un *asesor* y un *auditor*. La designación de asesores (canon 1575) y la de uno o de varios auditores (canon 1580) es potestativa. Pero, en las causas matrimoniales de nulidad, cuando el juez es único, se convierte en preceptiva, aunque basta nombrar un solo asesor en vez de dos. El motivo de esta obligación es claro: las causas



de nulidad matrimonial deben resolverse normalmente en tribunales de tres jueces; por lo cual no es mucho que, cuando excepcionalmente son resueltas por un juez único, se exija al lado de éste un auditor o instructor de la causa y sobre todo un juez asesor, los cuales presten su ayuda al juez principal único, que es quien ha de dictar la sentencia.

d) *Modo de actuar la Conferencia Episcopal* (norma V, § 3). Sobre el *modo como puede actuar* la Conferencia Episcopal en la concesión de la licencia solicitada, sea la actual o la habitual del párrafo 1 de la norma V, sea la actual o singular del párrafo 2, se añade en el párrafo 3 de la misma norma que la Conferencia Episcopal puede obrar con arreglo a sus propios estatutos. Es razonable, dada la naturaleza particular y técnica de la materia y la relativa frecuencia y aun urgencia de los casos que pueden ofrecerse, que la Conferencia no obre en pleno sino por una Comisión de sus miembros o por uno solo de sus miembros; pero siempre, y sobre todo en el último supuesto, convendrá que oiga el parecer de algún perito en la materia.

## 2) Los seglares en el oficio de asesor y de auditor, y las mujeres en el oficio de notario (norma VI).

VI. «Ad munus assessoris et auditoris in Tribunalibus cuiusvis gradus, viri laici vocari possunt; munus autem notarii sive viri sive mulieres suscipere possunt».

VI. «Para el cargo de asesor y de auditor en Tribunales de cualquier grado, pueden ser asumidos seglares varones; en cambio el cargo de notario pueden asumirlo ya varones, ya mujeres».

La norma VI viene a ampliar la participación de los laicos en tribunales eclesiásticos

de cualquier grado, facilitando así la tramitación y mejor solución de los pleitos matrimoniales, y lo mismo ocurrirá con los demás pleitos en el tribunal eclesiástico. La norma VI, además de modificar la legislación del Código, plantea nuevamente el problema del sujeto de la jurisdicción eclesiástica. En cuanto a los oficios de *juez asesor* (canon 1575) y de *notario* (canon 1585) no hay dificultad; porque, no siendo oficios jurisdiccionales, desde el punto de vista doctrinal cualquier laico, hombre o mujer, puede desempeñarlos normalmente. No así el oficio de *juez auditor* (cc. 1580-1584), que es oficio jurisdiccional de orden cognoscitivo y con carácter instructorio, aunque no faculte para dictar sentencia. Pero la dificultad doctrinal ha quedado ya resuelta anteriormente, desde el momento en que se ha autorizado que un laico forme parte, incluso como juez principal, en el tribunal colegiado.

Las *modificaciones de la legislación canónica* aparecen bien justificadas, como ya dijimos al hablar del juez laico o seglar en el tribunal colegiado para estas causas de nulidad matrimonial. Aunque el *juez asesor* no goza de jurisdicción, la S. Congregación del Concilio declaró, con fecha 14 de diciembre de 1918 (AAS 11, a. 1919, p. 132), que las personas laicas no pueden ser *asesores* en los tribunales eclesiásticos; y juntamente declaró que los laicos no pueden ser *auditores*. Estas dos declaraciones quedan ahora modificadas a favor de los laicos, ampliando así la participación de los laicos varones en los tribunales eclesiásticos.

La participación se extiende también, aunque de otra forma, a las *mujeres*. Aparte del derecho de demanda que las mujeres tienen en los tribunales eclesiásticos y del derecho

de alegar pruebas, su participación en los mismos es muy escasa. Tienen derecho de representar a sus hijos menores (canon 1648, § 1), pero no son admitidas a hacer de abogados y procuradores. Expresamente son excluidas en las causas de beatificación y de canonización (canon 2004, § 1).

En cuanto al oficio de *notario*, si bien este oficio no es jurisdiccional, la legislación del Código lo reserva a los clérigos y sólo, cuando escasean éstos, pueden escogerse laicos varones para este oficio, exceptuando siempre las causas criminales de los clérigos (canon 373, § 3). Ahora, en la norma VI se autoriza, al menos para las causas matrimoniales de nulidad, que también las mujeres desempeñen el oficio de notario.

Acerca del *defensor del vínculo* y del *promotor de justicia* nada se dice en el presente documento pontificio. El canon 1589, § 1, manda que los titulares de estos oficios sean *sacerdotes*. Juzgamos conveniente que, para casos particulares, la Santa Sede directamente o por medio de la Conferencia Episcopal conceda que puedan ser *clérigos no sacerdotes* y, a falta de éstos, aun seglares varones, adornados de todas las demás cualidades prescritas en el mismo canon 1589.

### 3) Cualidades de los seglares que desempeñan oficios en el tribunal eclesiástico (norma VII).

VII. «Laici ad huiusmodi munera assumendi fulgeant catholica fide et bonis moribus ac simul iuris canonici scientia. Cum autem agitur de munere iudicis viro laico conferendo, de quo in n. V, § 1, ii praeferantur qui etiam consuetudinem fori habeant».

VII. «Los seglares asumidos para dichos cargos deben distinguirse por su fe católica y por sus buenas costumbres, a la vez que por su ciencia canónica. Cuando se trate de conferir a un seglar el oficio de juez, como queda dicho en la norma V, § 1, se han

de preferir aquellos que tengan también experiencia de foro».

Cuanto más alta sea la participación de los seglares laicos en las funciones del tribunal eclesiástico, mayor deberá ser la exigencia de cualidades de fe católica y de moralidad, de ciencia canónica y de práctica judicial; no puede exigirse para cada oficio a los seglares menos que a los clérigos. De esta manera los tribunales eclesiásticos mantendrán el prestigio y la confianza que necesitan y que generalmente han alcanzado; incluso el grado de su pericia podrá ser más elevado al poder hacer una selección más amplia del personal. Para esto es necesario que las personas seglares que se incorporan activamente al tribunal eclesiástico añadan a la ciencia jurídica civil la ciencia canónica, la práctica forense y algún conocimiento de la jurisprudencia eclesiástica.

Importa reafirmar que, no obstante la participación de personas seglares, el tribunal continúa siendo por su naturaleza eclesiástico y dependiente de la Jerarquía, si bien los ministros del tribunal, sean clérigos o laicos, actúan con independencia y con propia responsabilidad en el desempeño de su función juzgadora, dentro del marco legal.

### LAS APELACIONES (normas VIII-IX).

#### 1) Obligación de apelar y procedimiento (norma VIII).

VIII. «§ 1. A prima instantia, matrimonii nullitatem declarante, vinculi defensor ad superius Tribunal provocare tenetur intra legitimum tempus; quod si facere neglegat, auctoritate praesidis vel iudicis unici compellendus est.

§ 2. Apud Tribunal secundae instantiae vinculi de-



defensor suas animadversiones exhibeat ut dicat utrum contra decisionem lattam in primo gradu aliquid opponendum habeat necne. Contra quas animadversiones collegium, si opportunum censuerit, partium earumve patronorum animadversiones exquirat.

§ 3. Visa sententia et perpensis animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exquisitae et datae fuerint, partium earumve patronorum, collegium suo decreto vel decisionem primi gradus ratam habet, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam almitit. In priore casu, nemine recurrente, ius est coniugibus, qui alioquin non impediuntur, decem diebus a publicatione elapsis, novas nuptias contrahere».

VIII. «§ 1. Contra la primera sentencia que declara la nulidad del matrimonio, el defensor del vínculo está obligado a apelar al Tribunal superior dentro del tiempo legítimo; si dejare de hacerlo, ha de ser obligado a hacerlo por la autoridad del presidente o del juez único.

§ 2. Ante el Tribunal de segunda instancia, el defensor del vínculo presente sus observaciones indicando si tiene algo que objetar o no a la decisión de primer grado. Contra esas observaciones el colegio, si lo cree oportuno, pida las observaciones de las partes o de sus abogados.

§ 3. Vista la causa y consideradas las observaciones del defensor del vínculo y, si han sido pedidas y dadas, las de las partes o de sus abogados, el colegio, mediante decreto, o ratifica la decisión de primer grado o admite la causa para examen ordinario de segundo grado. En el primer caso, si ninguno recurre, los cónyuges pueden contraer nuevas nupcias, pasados diez días de la publicación del decreto, si no están impedidos por otra razón».

El modo de tratar las causas matrimoniales acerca del vínculo *en el tribunal de apelación* es la modificación más importante que se introduce en la Carta Apostólica de Pablo VI y la que más puede contribuir a la aceleración del proceso. Es claro que las normas contenidas en este capítulo de las *apelaciones* y en el siguiente de los *casos especiales* no pueden aplicarse ni por analogía a ningún otro proceso.

a) *Obligación de apelar contra la primera sentencia declaratoria de nulidad* (norma VIII, § 1). La validez del vínculo matrimo-

nial goza del favor del derecho por motivos de orden religioso y de orden social; y por esta causa no basta una sola sentencia declaratoria de nulidad sino que son necesarias, a lo menos, dos sentencias conformes. Contra la primera sentencia que declara la nulidad del matrimonio puede apelar la parte que se crea perjudicada o disienta del fallo dentro del plazo legal; y en todo caso puede pedir la revisión de la causa aunque, si han recaído dos sentencias, es preciso alegar nuevas pruebas (cc. 1903, 1989; Provida, n. 217).

Pero el defensor del vínculo debe siempre apelar contra la *primera sentencia* declaratoria de nulidad, aun cuando crea que no hay objeción alguna que oponer a la sentencia dada. Ni siquiera la apelación interpuesta por la parte que se sienta perjudicada releva al defensor del vínculo de la obligación de apelar (Provida, art. 212, § 3). Debemos añadir que, aun en el supuesto de que el defensor del vínculo no haya cumplido su obligación de apelar dentro del plazo de diez días, todavía deberá hacerlo y si no lo hace, ha de ser obligado por la autoridad competente (norma VIII, § 1; canon 1986).

Hay, sin embargo, otro supuesto no considerado en la norma VIII y es el siguiente. Si la primera sentencia es *favorable a la validez* del vínculo matrimonial, el defensor del vínculo nada tiene que hacer. Pero entonces puede apelar la parte que afirme la nulidad y también el promotor de justicia, si interviene en la causa. Las normas VIII y IX van determinando cómo se ha de proceder cuando la sentencia, en primera instancia, resultó favorable a la *nulidad* del matrimonio. En cambio no se cuidan para nada del caso en que la sentencia sea favorable a la *validez*. Para el primer caso se

concede en el Motu proprio de Pablo VI un proceso judicial abreviado, en grado de apelación. Del segundo caso no se habla; lo cual quiere decir que no se concede el proceso abreviado y por lo tanto hay que seguir el proceso ordinario del Código. De esta manera el que impugna la declaración de validez no está en igualdad procesal respecto del que impugna la declaración de nulidad, sino que el primero debe seguir un proceso más largo que el segundo. Es una aplicación, tal vez criticable, del *favor que el derecho presta a la validez del matrimonio*.

b) *Doble procedimiento, en segundo grado, contra la sentencia declaratoria de nulidad, dada en primer grado* (norma VIII, §§ 2 y 3). Presentada por el defensor del vínculo la apelación contra la *primera sentencia de nulidad*, se admite, según los casos, un doble procedimiento judicial, el que puede llamarse de *ratificación* y el *proceso ordinario apelatorio*.

Este doble procedimiento, según que la sentencia declaratoria de nulidad matrimonial sea o no aprobada por *decreto* del tribunal de segundo grado, ha de seguirse aun cuando a la apelación del defensor del vínculo contra la primera sentencia de nulidad se una también la apelación de la parte que defiende la validez. El texto de la norma VIII impone siempre como *primera solución* contra la sentencia de nulidad, dada en el tribunal de primer grado, el decreto del tribunal de segundo grado, prescindiendo de que a la apelación del defensor del vínculo acompañe o no la apelación de la parte interesada. Si así no fuese, el procedimiento expeditivo *por decreto* del tribunal de segundo grado se frustraría siempre que apelase también la parte que defiende la validez.

Hay, sin embargo, una diferencia entre el

supuesto de que apele sólo el defensor del vínculo y el supuesto de que apele juntamente con él la parte que impugna la nulidad. Y la diferencia consiste en que, si ésta no apela, tampoco hay obligación de oírle o pedir sus observaciones (norma VIII, §§ 2, 3); mientras que, si ella también apela, hay obligación de oírle, porque quien legítimamente invoca el ministerio judicial debe ser escuchado.

El primer procedimiento —el que decide por decreto ratificar o no la sentencia de nulidad dictada en primer grado— es llamado muy acertadamente por L. del Amo (l. c., pp. 460-461) procedimiento de *alzada*, que consiste en la revisión de lo actuado por el juez o tribunal inferior, sin nueva alegación de pruebas y sin las formalidades propias del proceso judicial. Por la falta de las formas estrictamente judiciales, aunque el proceso de ratificación se hace en el tribunal de segundo grado, no es propiamente una segunda instancia sino un nuevo examen de lo ya actuado, teniendo en cuenta las observaciones del defensor del vínculo del tribunal superior y también las contraobservaciones de las partes contendientes o de sus abogados, cuando haya lugar a ello. En todo caso, dada su importancia y por afectar al mérito o fondo mismo de la causa que se ventila, la decisión estimatoria o desestimatoria de la sentencia del tribunal de primera instancia debe darse mediante decreto debidamente razonado «in iure et in facto» por todos los miembros del tribunal superior.

Si la sentencia dada en primera instancia no *obtiene el decreto de ratificación* del tribunal colegiado superior, entonces empieza a desarrollarse, en segunda instancia, el verdadero *proceso ordinario* según la legislación canónica y la posterior complementa-



ria (norma VIII, § 3). En este caso no tienen ya aplicación las demás prescripciones de la norma IX que luego vamos a exponer; porque contra el decreto que *niega la ratificación* de la sentencia declaratoria de nulidad, dictada en primera instancia, no se admite nuevo *recurso*.

Pero, si la sentencia *es aprobada* mediante decreto en el tribunal de segundo grado y *no se opone ningún recurso* (norma VIII, § 3), la controversia queda zanjada y los cónyuges pueden contraer nuevas nupcias, cumpliendo lo que se establece al efecto en la misma norma VIII, § 3, a saber, que pasen diez días desde la publicación del decreto y que no haya otro impedimento. En el caso de *oponerse recurso* contra el decreto ratificador de la sentencia de nulidad, la causa sigue adelante y se procede en conformidad con la norma IX, que describe la última trayectoria del nuevo proceso abreviado, prescrito en la Carta Apostólica de Pablo VI.

## 2) **Recurso contra el decreto que ratifica la sentencia declaratoria de nulidad** (norma IX).

IX. «§ 1. Adversus decretum collegii, sententiam primi gradus ratam habens, defensor vinculi vel pars, quae se gravatam putet, ius habet recurrendi, intra decem dies a die publicationis decreti, ad superius Tribunal, sed tantummodo prolatis novis et gravibus argumentis, quae tamen praesto sint. Huiusmodi argumenta debent exhiberi Tribunali tertii gradus intra mensem ab interposito recursu.

§ 2. Defensor vinculi tertii gradus, audito praeside Tribunalis, potest a recursu recedere; quo in casu Tribunal declarat litem finitam. Si autem pars recurrat, Tribunal, perpensis argumentis allatis, intra mensem ab interposito recursu vel recursum reiciit per decretum, vel causum admittit ad ordinarium tertii gradus examen».

IV. «§ 1. Contra el decreto del colegio ratificando la sentencia de primer grado, el defensor del vínculo o la parte que se considere perjudicada tienen derecho de recurrir al Tribunal superior en el plazo

de diez días desde el día de la publicación del decreto, pero solamente aduciendo nuevos y graves argumentos, que sin embargo han de estar ya dispuestos. Estos argumentos deben presentarse ante el Tribunal de tercer grado en el plazo de un mes a partir de la interposición del recurso.

§ 2. El defensor del vínculo de tercer grado, oído el Presidente del Tribunal, puede desestimar el recurso, en el cual caso el Tribunal declara terminado el pleito. Sin embargo, si una parte recurre, el Tribunal, considerados los argumentos alegados, en el plazo de un mes desde la interposición del recurso o rechaza el recurso por decreto o admite la causa al examen ordinario de tercer grado».

Esta última posible fase del nuevo proceso se desarrolla en el tribunal de *tercer grado* y puede concluir o por simple declaración de pleito terminado, o por decreto razonado, o por sentencia.

Aunque la sentencia dada en primera instancia *a favor de la nulidad del matrimonio* sea ratificada por decreto del tribunal de segundo grado, todavía la causa no queda necesariamente terminada. Contra el decreto aprobatorio cabe aún no verdadera apelación pero sí recurso al tribunal de tercer grado en el plazo de diez días (norma IX, § 1).

Ya queda dicho que el *decreto* que ratifica, en segundo grado, la sentencia declaratoria de nulidad de primer grado no es verdadera *sentencia* ni constituye término de una segunda instancia. Sin embargo, puede decirse que el decreto equivale de algún modo en este caso a una sentencia, y la abreviada sustanciación de la causa en el grado de apelación equivale también a una segunda instancia, con la ventaja de economía procesal que supone la sustitución de una forma larga por otra abreviada. Por esta causa, o termina el proceso, o, si ha de proseguirse, deben alegarse en el momento mismo de recurrir nuevos y graves argumentos como si ya hubiesen recaído dos sentencias conformes sobre la materia. Estos ar-

gumentos, dice la norma IX, § 1, deben presentarse ante el tribunal de tercer grado en el plazo de un mes a partir de la interposición del recurso, como si se tratase de apelación (cf. cc. 1881, 1883).

El *recurso* lo presenta, desde el segundo grado, el defensor del vínculo que actúa en este grado o bien la parte que se considere perjudicada, es decir, aquella que defiende la validez del matrimonio. Mediante este recurso contra el decreto del tribunal de segundo grado que ratifica la nulidad del matrimonio, la causa llega al tercer estadio, y aquí se procede conforme a lo que dispone la norma IX, § 2.

En el *tribunal de tercer grado*, el defensor del vínculo puede decirse que es el árbitro de la causa. No es el tribunal o el Presidente del tribunal, oído el defensor del vínculo, quien desestima el recurso contra el decreto que ratifica la nulidad; sino, al contrario, en este caso es el defensor del vínculo quien, al desestimar el recurso, reduce la misión del tribunal a *declarar* terminado el pleito. No deja de ser extraño semejante modo de proceder, que viene a prejuzgar el escaso fundamento o al menos la falta de argumentos nuevos y graves que suele tener el recurso contra la nulidad ya dos veces afirmada, cuando ni el mismo defensor del vínculo apoya tal recurso, favorable a la validez. Pero, aún así, debiera ser el propio tribunal o el Presidente, oído el defensor del vínculo quien decide la admisión o no admisión del recurso, con participación activa y directa en su valoración.

Si todavía una parte recurre contra esta forma de terminar el pleito, o bien el defensor del vínculo, en tercer grado, estima el recurso presentado contra la declaración de nulidad creyendo que tiene fundamento, el

tribunal deberá resolver el caso, considerando los argumentos alegados, sin necesidad de ninguna otra investigación especial. La resolución del tribunal en este caso debe darse muy rápidamente, en el plazo de un mes desde la interposición del último recurso, y puede ser doble. El tribunal puede rechazar mediante decreto el último recurso, y así queda plenamente ratificada la sentencia declaratoria de nulidad que se dio en el tribunal de primer grado. Pero todavía puede suceder —si bien es muy poco probable— que el tribunal de tercer grado aún no vea con certeza el fundamento de la declaración de nulidad y entonces, abandonada ya la vía expeditiva de la solución por decreto, la causa vuelve de nuevo a la vía del proceso ordinario, que se instaura en el mismo tribunal de tercer grado y deberá terminarse por medio de sentencia.

Aquí se presenta una anomalía. Este proceso ordinario que ahora se va a reinstaurar es en realidad la verdadera *segunda instancia* judicial. Pero esta segunda instancia no se establece en el tribunal de segundo grado —salvando con ello la correspondencia entre las instancias y los grados del tribunal así como la normal jerarquía de los tribunales— sino que la segunda instancia se introduce ante el tribunal de tercer grado, pasando por alto el segundo. Sin embargo, creemos que esta anomalía procesal debe justificarse por ser coherente dentro del sistema mixto de solución *por decreto* y *por sentencia* que la nueva reforma sanciona. Realmente la *segunda instancia* ya no puede volver al tribunal de segundo grado después que la causa llegó al tercero. Y por otra parte este tribunal ya conoció la causa y dio su resolución por un decreto que tiene efecto de sentencia. No se puede decir por consiguien-



te que el tribunal de segundo grado haya sido preterido, si bien no ha juzgado en proceso ordinario canónico.

Vuelta la causa, en la postrera e infrecuente hipótesis, a la vía del proceso ordinario en segunda verdadera instancia pero en el tribunal de tercer grado, después de haber fracasado todos los intentos y posibilidades de rápida solución por decreto según el documento de Pablo VI, nos encontramos con el decepcionante resultado de haber dado un rodeo para retornar casi al mismo punto de partida y tener que emprender de nuevo el camino largo que se quería evitar. A pesar de todo, lo cierto es que se pusieron los medios posibles para abreviar el proceso y que estos medios generalmente son eficaces. Pero, en definitiva, antes que la celeridad del proceso matrimonial ha de buscarse la seguridad en la justicia de la solución, y de ahí la necesaria vuelta en algún caso al proceso ordinario tras prolijo rodeo.

### NORMAS PARA CASOS ESPECIALES (normas X-XIII).

#### 1) Proceso judicial sumario. Modo de proceder en primer grado (normas X-XI).

X. «Cum ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de existentia impedimenti dirimentis, simulque pari certitudine patuerit dispensationem super his impedimentis datam non esse, hisce in casibus, praetermissis sollemnitatibus in iure recensitis, poterit Ordinarius, citatis partibus et interveniente defensore vinculi, matrimonii nullitatem declarare.

XI. Item sub iisdem clausulis et eodem modo, de quibus in n. X, Ordinarius matrimonii nullitatem declarare tunc etiam poterit, cum causa instituta est ex defectu formae canonicae vel ex defectu validi mandati procuratoris».

X. «Si por un documento cierto y auténtico, no sujeto a contradicción o excepción, constare la existencia de un impedimento dirimente y al mismo tiempo fuere claro con igualdad certeza que no ha sido dada la dispensa de tales impedimentos, en estos casos, omitiendo las solemnidades indicadas en el derecho, podrá el Ordinario declarar la nulidad del matrimonio, habiendo citado a las partes y habiendo intervenido el defensor del vínculo.

XI. Igualmente, a tenor de las mismas cláusulas y del mismo modo indicado en el n. X, el Ordinario podrá declarar también la nulidad del matrimonio, cuando la causa haya sido introducida por defecto de forma canónica o por defecto de mandato válido del procurador».

*Objeto del proceso sumario.* En las normas X-XIII *sobre casos especiales* se amplía notablemente la aplicación del proceso judicial sumario que el Código establece en los cánones 1990-1992 y la Instrucción «Provida Mater» en los nn. 226-231 para los *casos exceptuados*. Los *casos especiales* enumerados en las normas X y XI quedan exceptuados no sólo de las solemnidades del proceso canónico ordinario sino aun de las propias del proceso ordinario abreviado que prescribe en general la Carta Apostólica de Pablo VI para las causas matrimoniales de nulidad, a excepción de los requisitos que se mencionan en este mismo documento pontificio para los *casos especiales*.

El *objeto* del proceso sumario en la nueva reforma es mucho más amplio que en la legislación codicial y complementaria. Según el canon 1990 el proceso sumario para los *casos exceptuados* de las solemnidades del proceso ordinario solamente se aplica cuando se trata de los siguientes impedimentos dirimentes: disparidad de cultos, orden, voto solemne de castidad, ligamen, consanguinidad, afinidad y parentesco espiritual. Actualmente, según la reforma de Pablo VI, el proceso sumario para los que ahora se llaman *casos especiales* tiene lugar siempre

que *existe cualquier impedimento dirimente*, con tal que se cumplan las condiciones previstas (norma X). (Cf. cánones 1067-1080).

No sólo esto: la ampliación objetiva del proceso sumario es todavía mucho mayor. Este proceso tiene ahora aplicación también cuando el matrimonio es *inválido por defecto de forma canónica* (cc. 1094-1096; 1098) o *por defecto de mandato válido del procurador* para contraer matrimonio (cc. 1088, § 1; 1089). Es necesario igualmente que el procurador cumpla con lo que exige su condición de mandatario en el caso (norma XI).

*Inexistencia del matrimonio y matrimonio inválido.* Cuando el matrimonio no sólo es ciertamente inválido por estar afectado de un vicio sustancial, sino que hay razón para considerarlo como del todo inexistente, porque ni siquiera presenta figura externa de matrimonio canónico, entonces no es necesario ningún trámite judicial para declararlo o tenerlo como inválido. En este sentido dice el artículo 231 de la Instrucción «Provida»: «§ 1. Si alguien que consta ciertamente obligado a observar la forma canónica de celebración del matrimonio contrajo solamente matrimonio civil o celebró el matrimonio ante un ministro acatólico, o si los apóstatas de la fe católica se unieron en la apostasía civilmente o en rito extraño, no se requieren trámites judiciales ni intervención del defensor del vínculo a los efectos de comprobar el estado libre, sino que estos casos ha de resolverlos el Ordinario o el párroco, consultando al Ordinario, en la investigación que precede a la celebración del matrimonio, de que tratan los cánones 1019 y siguientes. § 2. Si queda alguna duda acerca de las condiciones expresadas en el § 1, se resolverá la cuestión por los trámites del

proceso ordinario». Lo que se dice del matrimonio inexistente por razón de la forma canónica, vale también para los demás casos de *matrimonio inexistente*, aunque el hecho externo tenga alguna remota analogía con el matrimonio. Ahora debe tenerse en cuenta la nueva legislación sobre los matrimonios mixtos.

*Condición esencial.* Tanto en el canon 1990 como en la norma X de la Carta Apostólica se requiere como *condición esencial* para la aplicación del proceso sumario que conste por *documento* cierto y auténtico, superior a toda contradicción y excepción, la existencia del impedimento dirimente, y que conste con igual certeza, por cualquier medio de prueba, que no se ha obtenido la *dispensa* del impedimento dirimente. La misma certeza y en la misma forma se exige ahora también para los casos en que haya defecto de forma canónica o defecto de mandato procuratorio.

*El Ordinario como juez.* Para los *casos especiales* que se enumeran en las presentes normas X y XI, como para los *casos exceptuados* de las solemnidades procesales de los que trata el canon 1990, el juez es el *Ordinario local*, en cuanto investido de potestad judicial; no el Provisor porque no es Ordinario, ni el Vicario General porque no es juez. Pero el Ordinario puede delegar en otra persona, que puede ser el mismo Provisor o el Vicario General. La *competencia del Ordinario como juez* se determina conforme a lo establecido en las normas I-IV.

*La acción judicial* que se propone es únicamente la declaratoria de nulidad matrimonial; y se instaura *de oficio* por el provisor ante el Ordinario local (Provida, art. 226), pudiendo presentar la demanda —que no es, en este caso, sino denuncia o comunica-



ción— los cónyuges o también el promotor fiscal.

*Citación de las partes e intervención del defensor del vínculo* (norma X). El proceso que se entabla para los *casos especiales* de declaración de nulidad matrimonial, aunque sumario y exceptuado de muchas solemnidades procesales, no deja de ser verdadero proceso judicial; y por lo tanto debe observarse lo que por su misma naturaleza exige todo proceso, a saber, la defensa y la discusión en contradictorio, para lo que es preciso la citación de las partes. Si éstas no responden a la citación, el proceso sigue sin que sean oídas. Pero, además de esto, el proceso declaratorio de nulidad matrimonial tiene otra exigencia peculiar y propia suya, que es la intervención del defensor del vínculo, figura algún tanto imprecisa en razón de sus funciones aunque ciertamente muy relevante en este proceso. También puede intervenir el promotor de justicia.

El *medio de prueba* en este proceso sumario para demostrar el *título* o fundamento de la declaración de nulidad (impedimentos dirimentes, defecto de forma canónica o de mandato procuratorio) es solamente un *documento* cierto y auténtico, superior a toda excepción. Pero la falta o no existencia de *dispensa legítima* basta, como ya dijimos, que se demuestre con toda certeza de cualquier modo legítimo aunque no sea por documento (cf. Provida, art. 226).

*La sentencia.* La acción declaratoria de nulidad matrimonial, en este proceso sumario, debe resolverla el Ordinario local no por decreto sino mediante *sentencia* judicial, alegando con brevedad y claridad los fundamentos de hecho y de derecho. Es necesario probar y fallar autoritativamente que existe la causa de nulidad y que no se obtu-

vo la necesaria dispensa. Del *recurso* al juez de segunda instancia contra la sentencia declaratoria de nulidad tratan las normas XII y XIII.

Si, en vez del resultado favorable a la nulidad, la sentencia dada en primera instancia declara que no consta por documento de la existencia de la causa o título de nulidad matrimonial, o no se prueba con certeza la falta de la dispensa, entonces no cabe más solución que, o atenerse a la validez del matrimonio, o bien volver a comenzar impugnando la validez en proceso ordinario abreviado, conforme a las normas del presente documento de Pablo VI.

## 2) Recurso contra la sentencia declaratoria de nulidad en el proceso sumario (normas XII y XIII).

XII. «Adversus hanc declarationem defensor vinculi, si prudenter impedimenta aut defectus, de quibus in nn. X et XI, non esse certa aut dispensationem super eisdem probabiliter intercessisse, provocare tenetur ad iudicem secundae instantiae, ad quem acta transmittenda sunt, quique scripto monendus est agi de casu speciali.

XIII. Iudex alterius instantiae, interveniente tantum defensore vinculi, decernet eodem modo, de quo in n. X, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum in casu sit ad ordinarium tramitem iuris; quo in casu eam remittit ad Tribunal primae instantiae».

XII. «Contra esta declaración el defensor del vínculo, si juzga prudentemente que no son ciertos los impedimentos o defectos señalados en las normas X y XI o que probablemente había habido dispensa de ellos, está obligado a acudir al juez de segunda instancia, al cual han de transmitirse las actas advirtiéndolo por escrito que se trata de un caso especial.

XIII. El juez de segunda instancia, con la sola intervención del defensor del vínculo, decide, del mismo modo que queda indicado en la norma X, si se ha de confirmar la sentencia o por el contrario si hay que proceder en la causa siguiendo el trámite ordinario del derecho; en este caso, la remite al tribunal de primera instancia».

a) *Recurso contra la sentencia de nulidad en el proceso sumario* (norma XII). Contra la sentencia declaratoria de nulidad matrimonial en primera instancia, cuando se sigue el procedimiento judicial sumario según las nuevas normas X-XIII, el defensor del vínculo no está absolutamente obligado a apelar, como lo está en el caso de la primera sentencia declaratoria de nulidad en el nuevo proceso ordinario abreviado (norma VIII, § 1) o en el proceso matrimonial ordinario del Código (canon 1986). El defensor del vínculo solamente está obligado a recurrir al juez de segunda instancia si juzga prudentemente que no se cumplen los presupuestos necesarios de las normas X y XI. Así lo prescribe la norma XII, que reitera lo que se establece en el canon 1991 para el proceso matrimonial sumario, pero ampliándolo al defecto de forma canónica o de mandato procuratorio para contraer matrimonio. Puede también recurrir el promotor fiscal, si interviene, y la parte que defiende la validez (Provida, art. 229, § 2). El recurso debe interponerse en el plazo fatal de diez días como para la apelación y puede interponerse ante el Ordinario *a quo* o ante el Ordinario *ad quem*.

b) *El modo de proceder*, en el tribunal del Ordinario de segundo grado, es el señalado en la norma XIII, simple adaptación del canon 1992. El Ordinario local, en función de juez, o un delegado del mismo, decide si ha de confirmarse o no la sentencia declaratoria de nulidad matrimonial dada por el Ordinario de primer grado. Si la sentencia de primer grado a favor de la nulidad es ratificada por cumplirse los requisitos de los casos especiales (normas X y XI), ya no cabe recurso, por la vía del proceso sumario, al Ordinario de tercer grado. Pero

siempre es posible la *revisión de la causa*, con argumentos graves y nuevos, sin plazos fatales (canon 1989).

Si no es ratificada la sentencia de primer grado, declaratoria de la nulidad, la causa debe continuar siguiendo, desde primera instancia, la vía del proceso ordinario abreviado, tal como se regula en el presente documento pontificio (normas I-IX).

En cuanto a la *intervención de las partes* ante el Ordinario de segunda instancia, en el proceso sumario, puede suscitarse alguna duda. En la norma XIII se dice que el juez decide en este caso «con la sola intervención del defensor del vínculo». Pero a continuación añade: «del mismo modo que queda indicado en la norma X». Y en esta norma se dice: «Habiendo citado a las partes y habiendo intervenido el defensor del vínculo». Creemos que, aunque las partes ya fueron citadas y oídas en primer grado, es muy conveniente que en segundo grado del proceso sumario sean citadas de nuevo para mejor asegurar su propia defensa y para esclarecimiento de la causa. Y si la parte que defiende la validez recurrió ella misma, como también si recurrió el promotor de justicia, ambos respectivamente deben ser citados y oídos en el segundo grado, porque el actor o el recurrente siempre debe ser oído.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS (normas 1-3)

### SUSPENSION DE LA CAUSA, INFORME Y DECISION

#### 1. Suspensión de la causa en el tribunal de segunda instancia (norma 1).

«Die quo praesentes Litterae Apostolicae vigere incipient, causa matrimonialis, quae, post primam sen-



tentiam matrimonii nullitatem declarantem, apud superius Tribunal ex appellatione legitima prosequitur, interim suspendatur».

«El día en que la presente Carta Apostólica entre en vigor, la causa matrimonial que, después de la primera sentencia declarando la nulidad del matrimonio, se esté prosiguiendo por legítima apelación ante el Tribunal superior, quedará entre tanto suspendida».

Según la norma VIII, § 1, contra la primera sentencia que declara la nulidad del matrimonio es obligatoria la apelación al tribunal superior. Este es el supuesto básico de las *disposiciones transitorias*. Y la solución general es que, cuando las causas se hallan en el tribunal superior al entrar en vigor la reforma de Pablo VI, o sea el 1 de octubre de 1971, queda suspendido el procedimiento anterior según el cual fueron incoadas, para proseguir, acomodándose a las nuevas normas dadas en el presente documento paulino.

Esta finalidad de la suspensión del procedimiento en el grado de apelación indica claramente que las causas que deben suspender su curso normal anterior son todas y solamente aquellas de las que trata la actual reforma y que deben conformarse a ella, no las que están fuera de su contexto. Nos llamamos por consiguiente de acuerdo con Mons. L. del Amo (l. c., p. 479), al afirmar que no quedan suspendidas en el tribunal de apelación sino que siguen su anterior curso normal de proceso ordinario canónico, no abreviado, los procesos siguientes: «a) El proceso ordinario de apelación contra las sentencias que hayan resuelto que no consta la nulidad del matrimonio acusado... b) El proceso ordinario de revisión de causa, en atención a los argumentos nuevos, graves y prestos que se adujeron y fueron admitidos para proceder en instancia plena (cc. 1903; 1989; art. 217). c) El proceso de

apelación, después de dos sentencias conformes a favor de la nulidad, interpuesta y seguida, conforme a derecho, por el defensor del vínculo al dictado de su conciencia (c. 1987; art. 221)».

La suspensión parece que tampoco debe afectar a las causas que, en grado de apelación, han llegado a la terminación del período probatorio mediante el decreto de *conclusión en la causa*. Son ya innecesarias y retardatorias en este momento procesal —contra el fin específico de la presente reforma— las nuevas informaciones y observaciones, y no resta lógicamente sino proseguir la discusión de la causa por la vía del proceso ordinario canónico hasta que todo esté visto para sentencia. Así como la *transferencia de la causa* de un tribunal a otro solamente tiene lugar antes de la *conclusión en la causa* (norma IV, § 3), de la misma manera el cambio de procedimiento no tiene razón ni ventaja, sino todo lo contrario, después de concluido el período probatorio.

## 2. Informe en el grado de apelación sobre la causa suspendida (norma 2).

«Vinculi defensor Tribunalis secundae instantiae animadversiones suas exhibeat super omnia, quae sive decisionem tatum in primo gradu respiciunt, sive actis in altero gradu eo usque expletis continentur, ut dicat utum contra decisionem latam in primo gradu aliquid opponendum habeat necne. Contra quas animadversiones collegium, si opportunum censuerit, partium earumve patronorum animadversiones exquirat».

«El defensor del vínculo del Tribunal de segunda instancia debe presentar sus observaciones sobre todo lo que atañe a la decisión tomada en primer grado y lo que se contiene en las actas de segundo grado concluidas hasta ese momento, diciendo si tiene algo o no que oponer a la decisión tomada en primer grado. Contra tales observaciones el Colegio, si lo juzga oportuno, pida las observaciones de las partes o de sus abogados».

Son necesarias en el tribunal de apelación las observaciones del defensor del vínculo, y facultativas, según la oportunidad, las contraobservaciones de las partes o de sus abogados. Es la misma norma VIII, § 2, pero extendida a todo lo actuado también en segundo grado.

### 3. Decisión sobre la causa suspendida (norma 3).

«Perpensis animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exquisitae et datae fuerint, partium earumve patronorum el visa sententia primi gradus, collegium suo decreto vel decisionem primi gradus ratam habet, vel causam in ordinario examine secundi gradus prosecuendam esse decernit. In priore casu, nemine recurrente, ius est coniugibus, qui alioquin non impediuntur, decem diebus a decreti publicatione elapsis, novas contrahendi nuptias. In altero vero casu instantia prosecuenda erit usque ad definitivam sententiam».

«Consideradas las observaciones del defensor del vínculo y también, si hubieran sido pedidas y dadas, las de las partes o las de sus abogados, y examinada la sentencia de primer grado, el colegio por medio de decreto o ratifica la decisión de primer grado o decreta la prosecución de la causa en examen ordinario de segundo grado. En el primer caso, si nadie presenta recurso, los cónyuges siempre que no estén impedidos por otras razones, tienen derecho a contraer nuevas nupcias pasados diez días de la publicación del decreto. En el segundo caso, la instancia tiene que ser continuada hasta la sentencia definitiva».

El tribunal de apelación procede, con respecto a la sentencia declaratoria de nulidad matrimonial, dada en primera instancia y suspendida en la segunda por la entrada en vigor del nuevo proceso judicial abreviado, de forma análoga a como se procede en las causas introducidas de nuevo con posterioridad a la reforma de Pablo VI (norma VIII, § 3).

Sabido es que las leyes procesales no son objeto del *ius quaesitum*, sino modos de ad-

ministrar justicia lo más rectamente posible. Y por lo tanto, cuando una causa fue incoada conforme a un procedimiento vigente y durante la tramitación cambia ese procedimiento, no se puede reclamar el derecho de atenerse al primero, como derecho subjetivo ya adquirido, sino que hay que sujetarse a la nueva ley procesal, salvo lo que oportunamente se establezca en disposiciones transitorias. Las presentes procuran la acomodación de las causas pendientes al nuevo sistema, que se considera más apto y más rápido.

El tribunal colegiado de apelación, vistos los informes requeridos y examinada la sentencia declaratoria de nulidad, dada en primer grado, resuelve por medio de *decreto*. Si este decreto, se dice en la norma 3 de las disposiciones transitorias, *ratifica la decisión* de primer grado y nadie presenta recurso, los cónyuges no impedidos por otra razón tienen derecho a contraer nuevas nupcias. ¿Y qué hacer si se presenta recurso? En esta norma tercera nada se dice. Pero el modo de proceder no es otro sino el señalado anteriormente en la norma IX.

Si el colegio de apelación *no ratifica* por decreto la primera sentencia declaratoria de nulidad, sino que decreta inmediatamente la *prosecución de la causa* en examen ordinario de segundo grado, entonces el mismo tribunal empieza a actuar como tribunal ordinario de apelación hasta dar sentencia, sea conforme o no a la de primer grado. Por esta vía judicial ordinaria más larga, en sucesivas posibles instancias o revisiones, el proceso llegará a su término, sin poder beneficiarse de la ventaja procesal de la nueva reforma por no realizarse los supuestos de ella.

Terminamos este nuestro comentario reco-



nociendo nuevamente la gran importancia de la reforma instaurada en la Carta Apostólica «Causas matrimoniales» de Pablo VI. La legislación posterior del Código sobre el proceso judicial canónico y especialmente sobre las causas matrimoniales es muy abundante y algunos documentos son muy extensos; pero ninguno contiene reformas procesales de tanta importancia como el presente. La reforma tiene carácter provisional «hasta que sea promulgado el nuevo Código de Derecho Canónico» y solamente cambia los puntos que se tratan en el documento «quedando, pues, inmutadas las demás normas canónicas sobre los procesos», según se dice en el Preámbulo. Pero las modificaciones introducidas valen «no obstante cualquier disposición contraria aún digna de especialísima mención», conforme se declara en las últimas palabras con las que se cierra el documento pontificio (cf. canon 22).

Interesa mucho experimentar, con fidelidad y buen criterio, las presentes normas que

pueden aportar valiosos elementos a la reforma del futuro proceso canónico, después que el estudio y la práctica hayan comprobado sus valores positivos y descubierto sus posibles fallos. Creemos que hay en la presente reforma no pocos elementos que podrán ser aplicados definitivamente por la competente autoridad no sólo a las causas matrimoniales de nulidad a las que el actual documento se refiere propiamente, sino también a otras causas matrimoniales y aun a las demás causas contenciosas en aquello que la naturaleza de la materia lo consiente. De esta manera, a la vez que las ventajas de la presente reforma alcanzarían mayor aplicación, se obtendría, hasta donde sea posible, la unificación o simplificación del procedimiento judicial eclesiástico que tanto es de desear, ya que la variedad innecesaria crea muchas dificultades y da ocasión a frecuentes errores, siendo al mismo tiempo causa de retraso en la solución de los pleitos y de daño para la paz social y bien de las almas.

## SUMMARIIUM

Reformatio processus matrimonialis, a S.S. Paulo VI instaurata die 28 martii anni 1971, nullatenus intendit faciliorem reddere dissolutionem vinculi matrimonialis lege divina firmati nec vigens ius sustantivum matrimoniale aliquo modo mutare, sed expeditius tantum vult controversias matrimoniales dirimere, quasdam normas statuendo quibus etiam pastoralis Ecclesiae caritas magis fulgeat.

Auctoris huius sudii propositum non hoc est, ex integro componere universum processum matrimoniale conflatis praexistentibus elementis canonicis quae permanent et novis nunc inductis in hoc pontificio documento; sed tantum intendit nova elementa seu mutationes illustrare —quandoque valorem extollere vel forsam crisi submittere— circum competentiam et compositionem tribunalis, circa appellationes et normas in casibus specialibus servandas, novas mutationes cum anteriori legislatione canonica iugiter conferendo.

Hoc pontificium documentum «Causas matrimoniales» respicit tantum proprie et directe causas vinculi matrimonialis quoad eiusdem vinculi validitatem. Attamen magnopere expedit ut nonnullae normae quamtotius, modo publico et generaliori, protrahantur et causis separationis coniugalibus applicentur. Auctor strenue propugnat non solum ut causae matrimoniales vinculum attingentes pergant esse reservatae tribunalibus ecclesiasticis —absque concessionibus in favorem tribunalis civilis seu secularis— sed asserit praeterea valde convenire, saltem pro Hispania, ut causae separationis coniugalibus minime tribunalibus civilibus committantur.

Normae I-IV Litterarum Apostolicarum «Causas matrimoniales» pertractant de foro competenti. Servatur forma canonica competentiae relativae seu territorialis tribunalis ratione loci in quo matrimonium celebratum est. Manet insuper, parum mutata, secunda forma ratione domicilii vel quasidomicilii, quae tamen, verbis non satis perspicuis, vocatur residentia non precaria. Inducitur in hoc motu proprio Pauli VI tertia nova forma competentiae rela-

## ABSTRACT

The present reform of the matrimonial process, decreed by His Holiness, Pope Paul VI, and dated March 28th, 1971, is not intended to facilitate the rupture of the matrimonial bond, which is indissoluble by Divine Law, nor to modify the substantive matrimonial law at present in force. It intends, rather, to solve those disputes which may arise in relation to matrimonial life, in the most rapid and appropriate manner possible, changing some procedural norms so that in this way the pastoral charity of the Church may be better exercised in matrimonial processes.

The author of this present study does not propose to reconstruct the whole process, as it now stands in the light of that which previously held, and the modifications introduced. He wishes only to underline —and sometimes criticize or evaluate— the changes which have been introduced regarding the competence of Tribunals and the constitution of them, as also those regarding appeals, and the rules to be observed in special cases, always relating those changes with the anterior legislation.

The present Pontifical document only deals specifically and directly with matrimonial causes in so far as concerns the validity or nullity of the bond. But some of its norms ought to be extended as quickly as possible to conjugal separation Causes. The author is especially interested in defending the view that, it is not only particularly desirable that Causes of matrimonial nullity should continue to be reserved to Ecclesiastical Tribunals —without concessions being made on the part of the Church in favour of Civil Tribunals— but also, that conjugal separation Causes, in Spain at least, should not be transferred to the Civil Tribunal either.

The competent forum is the subject of Norms I-IV. The canonical form of relative or territorial competence on account of the place where the marriage was celebrated is preserved. The second canonical form of relative or territorial competence on account of the domicile or quasi-domicile of the demanded is also preserved, but employing the quite imprecise phrase of «non-precarious residence». In addition, a third form is introduced, which is that of the Tribunal of the place, in which the greater





tivae seu territorialis, nempe, tribunalis loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque depositiones seu probationes sub determinatis conditionibus. En una ex praecipuis innovationibus quas invenimus in praesenti documento pontificio. Alia mutatio valde notanda est facultas transferendi causam de uno ad aliud tribunal aequae competens, mutatis circumstantiis locorum aut personarum. Haec facultas laedit profecto generale principium processuale perpetuationis competentiae in iudice qui reum primum citavit; quare possibilitas transferendi causam videtur infrequentis ac incertae utilitatis.

Normae V-VII peragunt de constitutione tribunalium. Tribunal potest esse collegiale vel unipersonale; trium iudicum clericorum, non necessario sacerdotum ut in iure Codicis; duorum clericorum et unius viri laici, aut unius tantum clerici in determinatis casibus. Ad munus assessoris et auditoris viri laici vocari possunt; munus autem notarii sive viri sive mulieres suscipere possunt.

Norma praestantissima habetur relate ad sistema appellationum, quod quidem multo brevius et expeditius evadit sed manet adhuc satis implicatum (normae VIII-IX). Ambitus processus iudicialis summarii, in casibus specialibus, mulprotenditur quod attinet ad suum obiectum (normae X-XIII). Tandem adduntur nonnullae normae temporariae pro causis matrimonialibus in secunda instantia pendentibus die quo praesentes Litterae Apostolicae vigere incipiunt.

part of the evidence is to be gathered, under certain conditions. This is one of the most important innovations introduced by the Apostolic Letter of Paul VI, and various conditions are required for its application. Another novelty which is worthy of special note is that of the possibility of transfer of the Cause from one Tribunal to another which is equally competent, in the case of a change of circumstances of places or of persons. This faculty undoubtedly injures the general principle of the perpetuation of the competence of the judge who originally called the demanded, and its suitability is disputable.

Norms V-VIII deal with the constitution of the Tribunals. The Tribunal may be collegiate or consist of a single person only; of 3 judges who are clerics, thought not necessarily, priests, as heretofore; of a cleric and a male lay-person, or of a single cleric in certain cases. The male lay-persons (or laymen) can exercise the function of Assessor or Auditor; that of Notary may also be exercised by women.

The most important norm of all is that which refers to the system of appeals, which has been abbreviated considerably, but is still, nevertheless, quite complicated (Norms VIII-IX). The summary judicial process, in exempt cases, which are now described as «special», has been amplified in regard to its object (Norms X-XIII). Finally transitory dispositions are laid down regarding those matrimonial Causes still pending in the Second Instance, when the present *Motu Proprio* of Pope Paul VI came into force.

